

España. [Leyes, etc., bancarias]

**Nueva ordenación del crédito y de la banca :
Banco de España, Instituto de Crédito a Medio y
Largo Plazo, Instituto de Crédito de las Cajas de
Ahorro.**

Madrid : Publicaciones del Instituto de Crédito de las
Cajas de Ahorro, 1962.

Signatura: 25368

La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

<http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html>

Aviso legal

*Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de
lucro siempre y cuando se cite la fuente*

NUEVA ORDENACION DEL CREDITO Y DE LA BANCA



BANCO DE ESPAÑA

INSTITUTO DE CREDITO
A MEDIO Y LARGO PLAZO

INSTITUTO DE CREDITO
DE LAS CAJAS DE AHORRO

20.1.1962

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO DE CREDITO DE LAS CAJAS
DE AHORRO

MADRID, 1962

68



BANCODE ESPAÑA
Eurosisistema

BIBLIOTECA



1 100007 954760

25368

Nueva ordenación del crédito y de la Banca

BANCO DE ESPAÑA

**INSTITUTO DE CREDITO A MEDIO Y LARGO
PLAZO**

**INSTITUTO DE CREDITO DE LAS CAJAS DE
AHORRO**

**PUBLICACIONES DEL INSTITUTO
DE CREDITO DE LAS CAJAS DE AHORRO**

MADRID, 1961

Nueva ordenación del crédito y de la banca

BANCO DE ESPAÑA

INSTITUTO DE CREDITO A MEDIO Y LARGO

PLAZO

INSTITUTO DE CREDITO DE LAS CAJAS DE

AHORRO

**NUEVA ORDENACION DEL CREDITO
Y DE LA BANCA**

Banco de España

Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo

Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro

**PUBLICACIONES DEL INSTITUTO
DE CREDITO DE LAS CAJAS DE AHORRO**

MADRID, 1962

NUEVA ORGANIZACIÓN DEL CRÉDITO
Y DE LA BANCA

Banco de España

Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo

Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro

Publicaciones del Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro

Alcalá, 27.—Madrid (14)

Depósito legal: M. 8.893-1962

SUCS. DE RIVADENEYRA, S. A.—PASADIZO DE ONÉSIMO REDONDO, 26.—MADRID.

SUMARIO

	<u>Págs.</u>
Ley de 14 de abril de 1962 sobre Bases de Ordenación del Crédito y de la Banca	11
Decreto-ley de 7 de junio de 1962 de Nacionalización y Reorganización del Banco de España	33
Decreto-ley de 7 de junio de 1962 sobre Creación del Ins- tituto de Crédito a Medio y Largo Plazo	53
Decreto-ley de 7 de junio de 1962 sobre Reorganización y Funciones del Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro.	67

SUMARIO

Página	
11	Ley de 14 de abril de 1965 sobre Estatus de Ordenación del Código y de la Prueba
23	Decreto-ley de 7 de junio de 1965 de Reorganización y Reintegración del Banco de España
23	Decreto-ley de 7 de junio de 1965 sobre Creación del In- stituto de Crédito a Largo y Corto Plazo
67	Decreto-ley de 7 de junio de 1965 sobre Reorganización y Reintegración del Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro

1965. Madrid. — 75 págs.

Sumario de la Ley de 14 de abril de 1965

Resolución de 14 de mayo de 1965. — 1.º y 2.º de mayo de 1965.

LEY DE BASES DE ORDENACION DEL CREDITO Y DE LA BANCA

LEY DE BASES DE ORDENACION DEL CREDITO Y DE LA BANCA

El Gobierno de la República, en uso de las facultades que le confiere la Constitución, para el desarrollo de las disposiciones de la Ley de Bases de Ordenación del Crédito y de la Banca, ha acordado lo siguiente:

Artículo 1.º La Ley de Bases de Ordenación del Crédito y de la Banca, de 19 de mayo de 1941, se aplicará a todas las entidades financieras que operen en España, con excepción de las que estén exentas por su naturaleza o por su finalidad.

Artículo 2.º Las entidades financieras que operen en España, con excepción de las que estén exentas por su naturaleza o por su finalidad, estarán sujetas a la supervisión y control de la Comisión de Bases de Ordenación del Crédito y de la Banca, creada por el Real Decreto de 19 de mayo de 1941.

Artículo 3.º La Comisión de Bases de Ordenación del Crédito y de la Banca, creada por el Real Decreto de 19 de mayo de 1941, tendrá a su cargo la supervisión y control de las entidades financieras que operen en España, con excepción de las que estén exentas por su naturaleza o por su finalidad.

Artículo 4.º La Comisión de Bases de Ordenación del Crédito y de la Banca, creada por el Real Decreto de 19 de mayo de 1941, tendrá a su cargo la supervisión y control de las entidades financieras que operen en España, con excepción de las que estén exentas por su naturaleza o por su finalidad.

Artículo 5.º La Comisión de Bases de Ordenación del Crédito y de la Banca, creada por el Real Decreto de 19 de mayo de 1941, tendrá a su cargo la supervisión y control de las entidades financieras que operen en España, con excepción de las que estén exentas por su naturaleza o por su finalidad.

Artículo 6.º La Comisión de Bases de Ordenación del Crédito y de la Banca, creada por el Real Decreto de 19 de mayo de 1941, tendrá a su cargo la supervisión y control de las entidades financieras que operen en España, con excepción de las que estén exentas por su naturaleza o por su finalidad.

Artículo 7.º La Comisión de Bases de Ordenación del Crédito y de la Banca, creada por el Real Decreto de 19 de mayo de 1941, tendrá a su cargo la supervisión y control de las entidades financieras que operen en España, con excepción de las que estén exentas por su naturaleza o por su finalidad.

Artículo 8.º La Comisión de Bases de Ordenación del Crédito y de la Banca, creada por el Real Decreto de 19 de mayo de 1941, tendrá a su cargo la supervisión y control de las entidades financieras que operen en España, con excepción de las que estén exentas por su naturaleza o por su finalidad.

Artículo 9.º La Comisión de Bases de Ordenación del Crédito y de la Banca, creada por el Real Decreto de 19 de mayo de 1941, tendrá a su cargo la supervisión y control de las entidades financieras que operen en España, con excepción de las que estén exentas por su naturaleza o por su finalidad.

Artículo 10.º La Comisión de Bases de Ordenación del Crédito y de la Banca, creada por el Real Decreto de 19 de mayo de 1941, tendrá a su cargo la supervisión y control de las entidades financieras que operen en España, con excepción de las que estén exentas por su naturaleza o por su finalidad.

LEY DE BASES DE ORGANIZACION DEL
CREDITO Y DE LA BANCA

LEY 2/1962 DE 14 DE ABRIL DE 1962, SOBRE BASES DE ORDENACION DEL CREDITO Y DE LA BANCA

(Publicada en el "Boletín Oficial del Estado" de 16 de
abril de 1962.)

La puesta en práctica, en un futuro próximo, de un Plan General de Desarrollo de la Economía Española exige un previo examen de los instrumentos de que se dispone para acometer con éxito esa trascendental tarea. Uno de esos instrumentos, quizá el más valioso, es el sistema bancario y la organización crediticia oficial, en los que se ha de apoyar, en gran medida, la financiación del Plan, para lo cual es preciso que el conjunto de instituciones que integran aquéllos funcionen armónica y coordinadamente, sin fallos, interferencias, ni vacíos, en forma tal que, estimulando por los medios adecuados la formación del ahorro, se logre canalizarlo convenientemente hacia la inversión.

Bastaría esta razón para justificar la necesidad y oportunidad de la reforma, pero existen otras igualmente poderosas, derivadas del estado de permanente evolución en que se encuentran las sociedades humanas, en sus aspectos económico, social y político, por efecto de los avances de la técnica, de la constante aspiración de las gentes a aumentar su bienestar y de las corrientes ideológicas que favorecen estas aspiraciones.

Por otra parte, si las instituciones de carácter económico

requieren, en general, una periódica revisión para mantenerlas ajustadas a las necesidades que han de atender a la coyuntura con que han de enfrentarse, no pueden constituir excepción los organismos y entidades reguladores o distribuidores del crédito, los defensores del valor del signo monetario, o los llamados a regir la política monetaria, cuando, además, los motivos especiales apuntados aconsejan la reforma en estos momentos.

Nuestra historia legislativa también revela la necesidad de una periódica revisión del sistema. Así, a la primera Ley de Ordenación bancaria, dictada en el año mil ochocientos cincuenta y seis, con el fin primordial de regular los bancos de emisión, siguió la de mil novecientos veintiuno —tras la crisis que se desencadenó al finalizar la llamada Gran Guerra, de mil novecientos catorce-mil novecientos dieciocho—, y más tarde la Ley de mil novecientos cuarenta y seis, promulgada después del victorioso fin de la campaña de Liberación española, cuando, reparados los mayores daños por ella ocasionados, se iniciaba una etapa de expansión, gracias a cuyo feliz desenvolvimiento es posible hoy, una vez estabilizada y saneada la situación alcanzada, acometer un nuevo y más ambicioso plan de desarrollo, que coloque la economía de España y el nivel de vida de sus habitantes a la altura lograda en otras naciones, que a su mayor riqueza natural unieron el disfrute de cuantiosas y oportunas ayudas exteriores.

Es obligado, asimismo, acomodar la reforma a los principios del Movimiento Nacional, promulgados por Ley de diecisiete de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho, en acatamiento de los cuales debe la iniciativa privada, fundamento de la actividad económica, ser estimulada, encauzada y, en último término, suplida por el Estado; ha de establecerse la subordinación de los valores económicos de la Empresa a los de orden humano y social; y ha de orientarse el más justo empleo y distribución del crédito público, en forma que, además de atender a su cometido de desarrollar la riqueza nacional, contribuya a crear y sostener el pequeño

patrimonio agrícola, pesquero, industrial y comercial, como se dispuso en la declaración IX del Fuero del Trabajo.

No se puede prescindir, al emprender la reforma, de la experiencia que proporciona el examen de la trayectoria seguida por la Banca Central, privada y oficial.

El Banco central de emisión, que tiene su antecedente remoto en el de San Carlos, creado en mil setecientos ochenta y dos, más tarde llamado de San Fernando, fusionado con el de Isabel II y convertido en Banco de España por la primera Ley de Ordenación bancaria, de veintiocho de enero de mil ochocientos cincuenta y seis, ha venido gozando, sin interrupción, del privilegio de emisión de billetes a partir del Decreto de diecinueve de marzo de mil ochocientos setenta y cuatro, siendo siempre banquero del Estado y también Banco comercial; pero no ha llegado aún a convertirse en Banco de Bancos, en el regulador central del mecanismo crediticio y en el responsable del valor exterior de nuestra moneda, aunque a ello tendió la segunda Ley de Ordenación bancaria, de veintinueve de diciembre de mil novecientos veintiuno, y en esa tendencia insistieron la de treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis y, por último, la de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, si bien circunstancias excepcionales de carácter transitorio aconsejaron atribuir la última de las funciones indicadas al Instituto Español de Moneda Extranjera.

Es evidente que gracias al Banco de España se resolvieron graves problemas de la Hacienda española, especialmente en el transcurso del siglo XIX, se evitaron o pudieron atenuarse situaciones críticas de Bancos y Empresas privadas y se contribuyó eficazmente al fomento de las actividades comerciales e industriales, en la medida que resultaba posible, dadas la naturaleza y estructura de aquél.

Mas las continuas demandas de crédito al Banco, por parte del Estado, la colocación en aquél de las también constantes emisiones de Deuda a cambio de autorizaciones para elevar la cifra de la circulación fiduciaria y el fuerte incremento de la cifra de Deuda Pública, automáticamente

pignorable con la paulatina pero progresiva monetización de tales títulos, operaron como fuerza impulsora de una expansión monetaria, que, junto a los beneficiosos efectos de las inversiones así financiadas, produjo en definitiva, tras alternativas varias, la desvalorización de la peseta, primero en el interior y más tarde en el exterior, y el agotamiento de las reservas de divisas. A esta situación vino a poner remedio la política de estabilización, mediante la fijación de un tipo de cambio realista para la peseta, la radical supresión de las emisiones de Deuda pignorable a voluntad de su tenedor, la contención del ritmo expansivo del volumen del crédito bancario y el equilibrio de las finanzas públicas, entre otras medidas.

Sin embargo, no sería prudente considerar cerrada la etapa de estabilización, transitoria por su naturaleza en cuanto significa acción estabilizadora, pero de permanente vigencia en cuanto al mantenimiento de la situación conseguida y al encauzamiento de la expansión dentro del equilibrio, sin precisar las atribuciones de la autoridad monetaria y colocar al Banco de España en la posición estatutaria exigida por la función que está llamado a desempeñar, liberándole de todas aquellas trabas derivadas de su actual naturaleza, todavía no desprendida del todo de su primitivo carácter de Sociedad Anónima por acciones.

No aceptando el Estado español el principio de neutralidad económica, la autoridad monetaria no puede ser delegada en el Banco de emisión, sino ejercida permanentemente por el Gobierno a través del Ministro de Hacienda; aunque en el orden técnico sea conveniente encomendar los detalles de ejecución de la política que se siga al Banco de España, con una organización autónoma y con la responsabilidad, la independencia y la autoridad que requiere su alta misión de colaborador, informador y asesor del Gobierno en orden a la política monetaria y de divisas y a la disciplina de la Banca privada.

De suma importancia es el papel asignado a la Banca privada en la gran empresa común de impulsar el progreso de la economía española. La historia de los Bancos comercia-

les españoles está tan íntimamente ligada a la de la economía patria en general que apenas se concibe la prosperidad de las instituciones bancarias en un ambiente de pobreza y depresión, ni es dable alcanzar un óptimo grado de desarrollo sin el correlativo desenvolvimiento de una Banca próspera, segura y eficiente.

Durante el pasado siglo, la Banca, salvo contadas excepciones, se hallaba aún en estado rudimentario, como consecuencia de la pobreza del país.

El Código de Comercio de mil ochocientos ochenta y cinco no hizo sentir tampoco su influencia en el desenvolvimiento de las empresas bancarias; es cierto que esbozó las líneas básicas de un sistema bancario y dedicó una sección a las compañías de crédito, pero sus preceptos permanecieron de hecho inaplicados.

Fueron causas análogas a las que operaron en otros países, deseosos de acelerar su desarrollo, unidas a otras peculiaridades derivadas de especiales situaciones por que atravesó España, fundamentalmente la repatriación de capitales de propiedad de españoles residentes en las antiguas colonias; la reducción de las entradas de capitales extranjeros desde el año mil novecientos catorce y el despertar de importantes iniciativas industriales, las que suscitaron la formación de los grandes Bancos nacionales y su orientación hacia un tipo de Bancos mixtos, que si no estaban precisamente definidos en el Código de Comercio, ni en la restante legislación sobre la materia, se convirtieron en una realidad viva y fecunda, que ha subsistido hasta nuestros días, a causa de un fenómeno característico: la existencia en la Banca comercial de un sobrante de recursos después de cubrir las demandas de créditos a corto plazo.

Ese exceso de recursos, procedentes del ahorro que no recogían las Bolsas españolas directamente del público por falta de hábito o de preparación financiera del pequeño capitalista, por espíritu excesivamente cauteloso del ahorrador o por otras razones, y que acudía a nutrir en gran parte las cuentas corrientes abiertas en los Bancos, era por éstos dedicado a la promoción de Empresas industriales, mediante

la aportación directa de capitales o la concesión de créditos que, aun instrumentados mediante documentos a plazos no superiores a noventa días, eran de hecho créditos a plazo medio o largo, gracias a sus sucesivas renovaciones, o bien por la adquisición en Bolsa de acciones u obligaciones de dichas Empresas. Merced a estas fórmulas que la amplitud y liberalidad del sistema permitía adoptar, los Bancos de depósito y descuento desempeñaron, en parte, el papel de aquellas Compañías de Crédito que, reguladas en forma sumaria e insuficiente en los artículos ciento setenta y cinco y ciento setenta y seis del Código de Comercio, no existían prácticamente en España.

Es revelador de la importancia del fenómeno apuntado el hecho de que los depósitos bancarios fueran incrementándose a mayor ritmo que la Renta Nacional, a precios corrientes, hasta llegar a representar en el año mil novecientos cincuenta y nueve un cuarenta y tres por ciento de ella, volumen desproporcionadamente alto para sus posibilidades de colocación según criterios comúnmente aceptados como sanos.

Como consecuencia de todo ello fue convirtiéndose la Banca no sólo en el elemento central de financiación, sino casi en el único, a la par que el mercado de capitales, de inversores independientes, retrocedió en importancia; y así, mientras en la época anterior a la Guerra de Liberación del total de financiación del sector privado (emisiones más créditos bancarios) la parte que suministraba la Banca (crédito más aumento de la cartera de valores industriales) representaba normalmente una proporción reducida, del orden del treinta por ciento en el período mil novecientos veintemil novecientos treinta y cinco, el porcentaje fue muy superior al sesenta por ciento en la etapa mil novecientos cuarenta-mil novecientos cincuenta y nueve. La Banca, en suma, se convirtió prácticamente en la fuente mayoritaria de financiación del sector privado, tanto si se trataba de cubrir necesidades a corto como a largo plazo.

Conviene advertir que la destacada posición que la Banca comercial iba conquistando en el sistema financiero fue fa-

vorecida por el llamado "statu quo bancario" y por un movimiento de concentración hacia grandes organizaciones, que lejos de facilitar la especialización de los Bancos tendió a convertirlos en entidades polifacéticas. Y es también de resaltar que esta actuación tan diversa y extendida de los Bancos de depósito o comerciales, aun cuando prestó notorios servicios a la economía, no resolvió en su totalidad el problema de la financiación de las inversiones y de la movilización de los recursos a corto plazo porque la actividad promotora de los Bancos se veía obligada a desentenderse de algunas inversiones especiales y porque se limitó fundamentalmente a las grandes empresas industriales.

Los beneficiosos efectos de la actuación de la Banca, en orden a la financiación de inversiones, se lograron muchas veces a costa de su inmovilización, con peligro para su liquidez y, en algunos casos, ciertamente muy aislados, para la seguridad del ahorro a ella confiado.

Y, por otro lado, esta situación hizo crecer la influencia de la Banca en los negocios privados, dando lugar a que pudiera, en ocasiones, hablarse de una política discriminatoria en la concesión de créditos.

Se impone, por tanto, afrontar decididamente los problemas planteados y efectuar los reajustes necesarios.

En orden a la modificación del "statu quo bancario", a fin de conseguir una mayor liberación, aunque en este aspecto no se debe ir más allá de lo que razonablemente demanda la prestación del servicio que la Banca está llamada a realizar, y evitando las inmovilizaciones excesivas o improductivas.

Procede también continuar utilizando a la Banca como promotora de inversiones y financiadora a plazo medio y largo con las imprescindibles cautelas para evitar los inconvenientes y riesgos de una inmovilización imprudente. Pero, al mismo tiempo que se tiene debidamente regulada la Banca mixta, debe tenderse, a medida que las circunstancias lo permitan, hacia la especialización bancaria con reglamentación de los Bancos de negocios.

Y como norma general, parece adecuado confiar al Banco

de España, con su nueva estructura, la inspección de todos los establecimientos bancarios privados, función inseparable de las demás que se le atribuyen.

Otro importante sector bancario que necesita ser revisado es el oficial. El vacío que dejó la disminución de la afluencia de capitales extranjeros y la limitación de las posibilidades de financiación del sector privado a través de la Banca suscitaron la creación de diversos Bancos y Entidades oficiales de crédito, todos los cuales, con excepción del Banco Hipotecario de España, surgieron a partir del año mil novecientos veinte, como el Banco de Crédito Industrial, el de Crédito Local, el Servicio Nacional de Crédito Agrícola, la Caja Central de Crédito Marítimo y Pesquero y el Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional.

La profusión de instituciones de esta clase es prueba de la intensa demanda de créditos para financiar proyectos de desarrollo que se ha dejado sentir en los últimos decenios y que no ha podido ser satisfecha ni con capitales importados ni a través de la Banca mixta.

Para unificar, simplificar y reforzar las fuentes de aprovisionamiento de dinero a esas Entidades —pues la variedad y cuantía de las emisiones por ellas realizadas introdujo cierta confusión en el mercado— y coordinar su actuación, se dictó la Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho y se creó por ella el Comité del Crédito a medio y largo plazo, cuya eficaz actuación en los tres pasados años aconseja reforzar sus atribuciones y elevarlo a la categoría de Instituto estatal, con misión rectora de las expresadas entidades, las cuales, para cumplir más perfectamente su cometido en la próxima etapa de desarrollo económico, con subordinación plena a las exigencias del bien común, deben ser paulatinamente nacionalizadas y reorganizadas bajo la dirección del mencionado Instituto, pues así lo impone, además, la coordinación de la política crediticia para la expansión económica y la obtención por tales Entidades de sus recursos financieros del sector público. Únicamente debe exceptuarse el Banco Exterior de España por razón de su forma típicamente bancaria

de financiación y su carácter predominantemente comercial.

No sería completa la reforma si no se aprovechara para vivificar las Cajas de Ahorro y utilizar mejor sus cuantiosos recursos, su extensa red de sucursales y sus altruistas finalidades para fomentar y auxiliar las inversiones de carácter agrícola, con especial atención a las cooperativas del campo, y prestar ayuda al artesanado, a los pequeños negocios comerciales industriales, a los modestos aspirantes a la propiedad mobiliaria y, en general, a las actividades económicas de más interés desde el punto de vista social. Para ello, y en atención a la creciente importancia de las Cajas, se hace menester estructurar el órgano superior de coordinación y rectoría de las mismas que, a la par que las disciplina, les sirve de enlace con la restante organización bancaria y crediticia.

Al contemplar las entidades llamadas a operar activamente en la ordenación y distribución del crédito, es menester también ampliar la protección del ahorro, ofrecerle mayores, más atractivos y seguros cauces hacia la inversión directa, e incluso regular la inversión anticipada del futuro ahorro. A este fin han de tender las normas sobre reglamentación de las Sociedades de Cartera en sus diversas modalidades, de las Bolsas de valores y ventas a plazos y otras que, junto al fomento de la demanda, eviten el uso inconveniente del crédito, su excesivo encarecimiento o el indebido fomento de actividades industriales deficientes, con las limitaciones que en cada momento se requieran, a fin de impedir que estas organizaciones se conviertan en instrumentos de control de empresas o de dominación del mercado.

El cuadro de normas que la reforma ha de contener incluirá también el establecimiento de las incompatibilidades precisas respecto de las personas que ostenten las funciones directivas y ejecutivas de las entidades integrantes del sistema como una mayor garantía de que éste funcionará en forma tal que la economía española se desarrolle en régimen sanamente competitivo en todos sus sectores —agricultura, industria y servicios—, que no se desaproveche nin-

guna posibilidad de inversión del ahorro nacional y del extranjero que acuda a colocarse en nuestra patria y que las demandas de crédito puedan ser ágil y equitativamente atendidas sin más discriminación que la que derive de la solvencia moral y material del peticionario y de la conveniencia de la aplicación que proyecte en función de los supremos intereses de la Patria.

La reforma de un mecanismo tan sensible y de tan altas repercusiones sociales debe realizarse escalonadamente y con prudencia, no sólo por la especial naturaleza del sistema bancario, sino también por la necesidad de acomodar las medidas que al efecto se adopten con las de todos los sectores de la economía que son complementarios.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

DISPONGO :

Artículo primero.—Se reformará el sistema crediticio y bancario, con sujeción a las siguientes Bases:

Dirección de la política monetaria y de crédito

Base primera.—La autoridad en materia monetaria y de crédito corresponde al Gobierno, el cual señalará al Banco de España y a los diferentes Organismos de Crédito, a través del Ministro de Hacienda, las directrices que hayan de seguirse en cada etapa, orientando en definitiva la política monetaria y de crédito en la forma que más convenga a los intereses del país.

Banco de emisión

Base segunda.—La reforma se centrará en torno a un Banco de España, que, para desempeñar su misión, debe ser nacionalizado. Por consiguiente:

a) Las acciones serán transferidas al Estado mediante el pago de un precio justo, fijado con arreglo a lo que se dispone en la disposición final primera.

b) Una vez adquiridas las acciones por el Estado, el Banco de España pasará a ser una Institución oficial, con personalidad jurídica. Dependerá del Gobierno a través del Ministerio de Hacienda.

c) Dentro de su carácter de instrumento de la política monetaria del Gobierno, el Banco de España tendrá, en el orden técnico, una organización autónoma.

d) Para mayor eficacia en su misión se establecerá una nueva estructura del Banco de España, separando los órganos encargados de las funciones directivas y ejecutivas de aquel otro que, por su carácter esencialmente consultivo, es el adecuado para que en él tengan representación los intereses de la Economía a través de la Organización Sindical, junto con otros representantes del interés nacional nombrados por el Gobierno.

e) Dentro de la necesaria flexibilidad exigida por el desarrollo de una política económica, se regulará la creación de dinero a través de los canales de expansión del crédito concedido por el Banco emisor y se establecerán normas sobre las operaciones de mercado abierto, redescuento a la Banca privada, medidas en relación a la pignoración por los Bancos de los Fondos Públicos, topes variables de depósitos legales obligatorios de los Bancos privados en el Banco de emisión y los demás instrumentos de control necesarios.

f) La inspección de la Banca privada será encomendada al Banco de España, de acuerdo con las normas que señale el Ministerio de Hacienda.

g) El movimiento de los pagos exteriores y la centralización de las reservas metálicas y de divisas deberán trasladarse al Banco de España.

No obstante, las funciones que la legislación vigente atribuye al Instituto Español de Moneda Extranjera continuarán siendo desempeñadas en su actual adscripción ministerial, quedando a determinación del Gobierno el momento en

que deba efectuarse aquel traspaso de funciones y el de cualquier otro de carácter operativo que el Gobierno acuerde, una vez desaparecidas totalmente las presentes circunstancias del comercio exterior.

h) La gestión directiva del Banco de España corresponderá a un Gobernador, que será nombrado por Decreto, y estará asistido por más de un Subgobernador, que por su orden se sustituirán, y cada uno de los cuales asumirá la dirección de un grupo de funciones especializadas.

i) El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda, regulará el ejercicio de cargos directivos y ejecutivos en el Banco de España, de manera que se desempeñen con la independencia que exige siempre el ejercicio de dichos cargos, fijando las debidas incompatibilidades.

El crédito a medio y largo plazo

Base tercera.—Se creará el Instituto de Crédito a medio y largo plazo en sustitución del actual Comité, con las siguientes características y funciones:

a) Será el órgano permanente de relación entre el Gobierno y las Entidades oficiales de crédito. Dependerá del Ministerio de Hacienda y tendrá personalidad jurídica y la capacidad necesaria para el cumplimiento de sus fines.

b) Ejercerá la alta dirección e inspección de dichas Entidades, a las que proveerá, en forma coordinada, de los recursos suficientes para que puedan actuar eficazmente en la política de desarrollo económico; les transmitirá las instrucciones de carácter general a que han de acomodar sus operaciones y velará por el cumplimiento de aquéllas.

c) Dispondrá de los medios financieros que el Ministerio de Hacienda le proporcione, bien procedan de anticipos del Tesoro, de cédulas para inversiones —suscritas por entidades o por particulares— o de aportaciones extranjeras, e incluso, en casos extraordinarios, por operaciones de Tesorería con los Bancos y Cajas de Ahorro, o por anticipos del Banco de España.

d) Podrá adquirir, dentro de la política general del crédito, y con carácter circunstancial, valores mobiliarios.

e) El volumen total del crédito a distribuir anualmente por el Instituto se fijará por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda, previo informe del Consejo de Economía Nacional.

f) El Instituto desempeñará las demás funciones atribuidas al Comité del Crédito a medio y largo plazo por la legislación vigente.

g) El Gobernador del Banco de España ostentará la presidencia del Instituto del Crédito a medio y largo plazo.

h) Las directrices para la coordinación entre las actividades del Instituto y las del Banco de España serán señaladas por el Ministerio de Hacienda.

i) Para el ejercicio de los cargos directivos y ejecutivos del Instituto se establecerán las oportunas incompatibilidades.

Las Entidades oficiales de crédito

Base cuarta.—Los Bancos Hipotecario de España, de Crédito Industrial y de Crédito Local serán nacionalizados con las peculiaridades y en la forma y plazos que el Gobierno establezca.

Las acciones serán transferidas al Estado mediante el pago de un precio justo, que se fijará con arreglo a lo dispuesto en la disposición final primera.

Se exceptúa de la nacionalización el Banco Exterior de España, el cual quedará sometido a la misma regulación y limitaciones que se impongan a los Bancos privados, sin perjuicio de la intervención que el Gobierno juzgue oportuno reservarse en tanto conserve aquél su carácter de Banco oficial.

El Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional, el Servicio Nacional de Crédito Agrícola, que se transformará en Banco de Crédito Agrícola, y la Caja Central de Crédito Marítimo y Pesquero serán reorganizados a fin de coordinar su actuación bajo la alta dirección del Instituto

de Crédito a medio y largo plazo, e incorporar a sus órganos de gobierno las adecuadas representaciones de la Administración, de los intereses de la Economía, a través de la Organización Sindical y otros representantes del interés nacional.

Para el ejercicio de los cargos directivos y ejecutivos de los Bancos oficiales y demás Entidades oficiales de crédito, se establecerán las oportunas incompatibilidades por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda.

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales

Base quinta.—Las Cajas de Ahorro serán reorganizadas en cuanto al superior órgano de control de las mismas y a sus operaciones, con arreglo a las siguientes normas:

a) El Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro desempeñará las funciones de alta dirección, coordinación e inspección de aquéllas y servirá de elemento de relación de las Cajas con el Banco de España y el Instituto de Crédito a medio y largo plazo.

Estará presidido por el Gobernador del Banco de España y lo integrarán representantes de las Cajas de Ahorro, de los intereses de la Economía a través de la Organización Sindical, y otros representantes del interés nacional nombrados por el Gobierno a propuesta del Ministro de Hacienda.

b) Las operaciones de las Cajas de Ahorro se reformarán y ampliarán dictando las disposiciones precisas para que se otorguen por aquéllas, con más amplitud, créditos con fines sociales a los empresarios agrícolas, a los artesanos, a las pequeñas empresas comerciales, industriales y pesqueras y a los modestos ahorradores para acceso a la propiedad, en particular agrícola, de vivienda y valores mobiliarios, y para que se facilite, en la mayor medida posible, el crédito en el sector agrícola, para impulsar la iniciativa de los cultivadores para modernizar sus explotaciones, in-

crementándose así las posibilidades financieras de transformación del medio rural, para lo cual deberá alcanzar la actuación de las Cajas a la empresa agrícola en general y a las instituciones cooperativas y demás asociaciones de carácter sindical

c) Las Cajas Rurales en todos sus grados serán reorganizadas para reforzar sus fines al servicio del Crédito Agrícola. Sin perjuicio de la disciplina a que actualmente están sometidas, el Ministerio de Hacienda ejercerá la inspección y control de las Cajas Rurales para asegurar el cumplimiento de sus fines privativos y su coordinación con la política general del crédito.

Banca privada

Base sexta.—Serán adoptadas las medidas necesarias para que, sin alterar de modo brusco la actual organización de la Banca mixta, se tienda a su especialización, teniendo en cuenta la existencia de entidades ya orientadas predominantemente hacia el sector industrial, y se regulará la Banca privada en los siguientes aspectos:

a) Promulgación del estatuto legal de los Bancos industriales y de negocios, asignándoles como función primordial la de promover nuevas Empresas industriales, animar y vitalizar así la iniciativa privada y colaborar en la tarea de financiación a largo plazo.

b) Adaptación de las carteras bancarias a la estructura y el porcentaje de Fondos Públicos que se fijen; señalamiento de límites en cuanto al redescuento, pignoración y reservas en el Banco emisor; determinación del coeficiente de liquidez y limitación de las compras futuras por los Bancos, con fondos de sus clientes, de acciones o participaciones de sociedades que estén ya en funcionamiento.

c) Enajenación en los plazos que se determinen de los valores industriales en poder de cada Banco por la cuantía que exceda del límite que se fije. Para dicha enajenación se establecerán los adecuados procedimientos y normas, tanto

en lo relativo a un favorable tratamiento fiscal de las plusvalías como a porcentajes graduales y otros aspectos.

d) En los casos en que los Bancos actúen como promotores de nuevas Sociedades, su participación en ellas se limitará a los porcentajes que se fijen en relación con sus recursos propios y con el capital de las Empresas de que se trate.

e) Igualmente se dictarán las normas necesarias para evitar ulteriores expansiones de la influencia de los actuales Bancos mixtos sobre las Empresas privadas y especialmente sobre otros Bancos.

f) El ejercicio de los cargos directivos y ejecutivos de la Banca privada deberá quedar sometido, en cuanto a incompatibilidades, a la regulación que establezca el Gobierno a propuesta del Ministerio de Hacienda.

"Statu quo bancario"

Base séptima.--Se darán mayores facilidades y libertad al acceso a la profesión de banquero y al ejercicio de ésta, modificando, por tanto, la actual regulación de manera que:

a) Los nuevos Bancos que se autoricen se constituyan con un capital mínimo, según las diferentes plazas.

b) Se evite la excesiva proliferación de sucursales y agencias, mediante criterios objetivos que establezca el Ministerio de Hacienda, con fórmulas dotadas de la adecuada flexibilidad, mediante cuya aplicación se creen los establecimientos bancarios en el número preciso para la prestación del servicio requerido por la economía nacional.

c) En todo caso, dichas fórmulas flexibles deberán crear la necesaria igualdad de oportunidades para todas las empresas bancarias.

d) Se regulará por el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda el establecimiento de la Banca extranjera fijando, en su caso, las limitaciones precisas y teniendo en cuenta, en lo que pudiera ser oportuno, el principio de reciprocidad.

Sociedades de cartera

Base octava.—Se perfeccionará la legislación vigente sobre Sociedades de cartera, apoyando su desarrollo y dándoles para ello mayores facilidades como instrumento de fomento del ahorro, procurándose, al mismo tiempo, mediante las oportunas regulaciones del Ministerio de Hacienda, que no puedan convertirse en un medio para controlar privadamente ciertos sectores financieros.

Bolsa de valores

Base novena.—Se regulará la organización, funcionamiento y operaciones de las Bolsas oficiales de comercio y en particular las operaciones a plazo, estableciéndose rigurosamente las garantías necesarias para evitar que puedan transformarse en instrumento de peligrosa especulación.

Ventas a plazos

Base diez.—Se facilitará la financiación de operaciones de venta a plazos de bienes de equipo industrial y agrícola y de consumo duradero, mediante la creación de entidades específicas, en las cuales deberá existir representación del Estado para garantizar el cumplimiento de las normas reguladoras que se dicten, sobre todo teniendo en cuenta los beneficios fiscales y de acceso a redescuento que podrán concederse, a fin de combinar la mejor defensa del consumidor con costes de financiación más reducidos y con las adecuadas garantías sobre la solvencia del comprador y demás participantes en la operación, al mismo tiempo que se controla el volumen del crédito, para impedir tensiones excesivas. Los efectos en que se formalicen las ventas a plazos podrán ser redescontables hasta la cuantía que establezca el Ministerio de Hacienda.

Artículo segundo.—El desarrollo de las precedentes Bases se efectuará en forma escalonada, al ritmo más conveniente a juicio del Gobierno o del Ministerio de Hacienda, en su caso, mediante las disposiciones del rango procedente.

Los Decretos con fuerza de Ley deberán dictarse en el plazo de dos años.

Disposiciones finales

Primera. El precio de las acciones del Banco de España y de los Bancos oficiales, que con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, sean nacionalizados, será igual al promedio de la cotización oficial en la Bolsa de Madrid durante el quinquenio comprendido entre el uno de enero de mil novecientos cincuenta y siete y el treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y uno. Para el cálculo de dicho promedio se tomará como dividiendo la suma de las cotizaciones mayor y menor de cada mes del referido quinquenio, publicadas en el "Boletín Oficial de Cotización de la Bolsa de Madrid", y como divisor, el número de cambios computados. Si dicho promedio resultare menor que el tipo máximo de cotización de las acciones durante el año natural de mil novecientos sesenta y uno, se considerará como precio de dichos títulos el equivalente a la cotización máxima durante el mencionado año.

El precio fijado conforme a lo establecido en el párrafo anterior será incrementado en el cinco por ciento de su importe, y la suma de aquél y de este incremento constituirá el precio justo a pagar por el Estado al que habrá de agregarse el interés legal del mismo a partir de uno de enero del ejercicio en que la nacionalización haya sido decretada, con independencia del dividendo que le corresponda por el último ejercicio.

El pago se hará en efectivo dentro de los meses siguientes a la fecha de la entrada en vigor de la disposición que decrete la nacionalización de la Entidad correspondiente.

En la primera emisión de títulos representativos de la

Deuda del Estado se otorgará preferencia a los antiguos accionistas propietarios en cuantía igual al importe de lo cobrado a consecuencia de la nacionalización.

Las cantidades satisfechas por el Estado en virtud de la presente disposición adicional estarán exentas, bajo cualquier concepto, de tributación por la Contribución General sobre la Renta correspondiente al ejercicio en que sean efectivamente abonadas.

Segunda. Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los créditos necesarios para la efectividad de los pagos que deban realizarse con arreglo a lo establecido en la disposición anterior.

Dada en el Palacio de El Pardo a catorce de abril de mil novecientos sesenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El presente documento es un extracto de los trabajos realizados en el curso de la investigación sobre el problema de la educación en la zona de la frontera de México con los Estados Unidos. El mismo tiene por objeto dar a conocer los resultados de los estudios realizados en el curso de la investigación sobre el problema de la educación en la zona de la frontera de México con los Estados Unidos.

Segunda. Por el presente se hace saber a todos los señores que los trabajos realizados en el curso de la investigación sobre el problema de la educación en la zona de la frontera de México con los Estados Unidos, han sido sometidos a la consideración de la Comisión de la Frontera, y que los resultados de los mismos serán publicados en el curso de la investigación sobre el problema de la educación en la zona de la frontera de México con los Estados Unidos.

TERCERA. Por el presente se hace saber a todos los señores que los trabajos realizados en el curso de la investigación sobre el problema de la educación en la zona de la frontera de México con los Estados Unidos, han sido sometidos a la consideración de la Comisión de la Frontera, y que los resultados de los mismos serán publicados en el curso de la investigación sobre el problema de la educación en la zona de la frontera de México con los Estados Unidos.

CUARTA. Por el presente se hace saber a todos los señores que los trabajos realizados en el curso de la investigación sobre el problema de la educación en la zona de la frontera de México con los Estados Unidos, han sido sometidos a la consideración de la Comisión de la Frontera, y que los resultados de los mismos serán publicados en el curso de la investigación sobre el problema de la educación en la zona de la frontera de México con los Estados Unidos.

QUINTA. Por el presente se hace saber a todos los señores que los trabajos realizados en el curso de la investigación sobre el problema de la educación en la zona de la frontera de México con los Estados Unidos, han sido sometidos a la consideración de la Comisión de la Frontera, y que los resultados de los mismos serán publicados en el curso de la investigación sobre el problema de la educación en la zona de la frontera de México con los Estados Unidos.

DECRETO-LEY DE NACIONALIZACION Y REORGANIZACION DEL BANCO DE ESPAÑA

DECRETO DE REORGANIZACIÓN Y
DEL BANCO DE ESPAÑA

DECRETO-LEY 18/1962 DE 7 DE JUNIO DE 1962 DE NACIONALIZACION Y REORGANIZACION DEL BANCO DE ESPAÑA

(Publicado en el "Boletín Oficial del Estado" del 13 de junio de 1962.)

La Ley dos/mil novecientos sesenta y dos, de catorce de abril del corriente año, dictó las Bases de Ordenación del Crédito y la Banca, que permitirán adaptar las políticas monetaria y de crédito a las nuevas circunstancias y perspectivas de la economía española.

Parte importantísima de la reforma es la nacionalización del Banco de España, en el que se centran funciones tan esenciales como la emisión de billetes de curso legal, la ejecución de la política monetaria con arreglo a las directrices del Gobierno, el control y la vigilancia de la Banca privada, la regulación del mercado de dinero y, en su día, el movimiento de pagos exteriores y constitución de reservas metálicas y de divisas.

La organización del Banco de España, tal como se estructura en el presente Decreto-ley, responde a la exigencia fundamental de una constante adaptación a las circunstancias variables de cada momento, a fin de ponerlo en condiciones de responder con oportunidad a los requerimientos generales de la economía y de mantener la estabilidad dinámica de la misma.

Para lograr estos objetivos era necesario dotar al Banco de España de mayor autonomía en su gestión, concibiendo

su Consejo ejecutivo de tal forma que permita un ágil espíritu de empresa, dentro de la independencia de perspectivas que se derivan de la plena dedicación de cada uno de sus miembros en virtud de las incompatibilidades que se prevén para el desarrollo de funciones de tan alta importancia.

El control e inspección de la Banca privada, así como la centralización de las estadísticas generales de carácter monetario y de crédito, son instrumentos imprescindibles para que el Banco de España pueda cumplir sus funciones como Banco central y Banco de banqueros y en todo momento actuar como organismo regulador de la política económica a través de las funciones y prerrogativas que en este orden deben corresponderle.

La creación de la Central de Riesgos servirá, sin duda, para que el Banco de España pueda ser órgano rector y apoyo de la Banca privada en la política de crédito, dentro de las directrices que el Gobierno señale.

Para robustecer las prerrogativas del Banco de España frente a la Banca privada, el presente Decreto-ley atribuye a dicho Instituto funciones que hasta ahora estaban encomendadas a la Dirección General de Banca, Bolsa e Inversiones, con lo cual se pretende una más íntima colaboración entre el Banco central y la Banca privada, que ha de reflejarse, sin duda, en un servicio más ágil y fecundo para la economía del país.

No podían faltar en un Decreto-ley de nacionalización del Banco de España normas precisas que definan el ámbito de sus operaciones, sus intervenciones en el mercado abierto, así como la elevada función de carácter consultivo e informador que como centro de la política monetaria y de crédito debe llevar a cabo en su doble aspecto de ejecutor de la alta política del Gobierno en su calidad de Banco central y Banco de banqueros, y como Organismo que reciba y canalice al poder público las inquietudes y necesidades de la economía para dar a las mismas la solución que las circunstancias de cada momento exijan.

Para lograr una unidad de punto de vista que permita en

todo momento al Gobierno conocer la situación de la economía y dictar las medidas oportunas, se establecen las necesarias vinculaciones entre el Banco de España, el Instituto de Crédito a medio y largo plazo y el Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro, tanto a través de la presidencia de los mismos, personalizada en el Gobernador del Banco de España, como de la presencia en los Consejos de los otros Institutos, de uno de los Subgobernadores.

El poner en ejecución la nueva estructura de la Banca y del Crédito es de evidente urgencia para poder adaptar la economía española a las nuevas perspectivas y a sus nuevos problemas, que no permiten dilación alguna porque exigen, perentoriamente, estructurar los instrumentos ejecutivos adecuados para el éxito de la Policía Económica del Estado.

En su virtud, en uso de la atribución contenida en el artículo trece de la Ley de las Cortes y oída la Comisión a que se refiere el artículo diez de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, a propuesta del Consejo de Ministros en su reunión del día once de mayo de mil novecientos sesenta y dos,

DISPONGO :

Artículo primero.—*Naturaleza y personalidad.* El Banco de España es una entidad de derecho público con personalidad jurídica y plena capacidad. Dependerá del Gobierno a través del Ministerio de Hacienda.

El patrimonio inicial de la nueva entidad estará constituido por el capital y reservas del Banco nacionalizado de cuyo activo y pasivo se hará cargo.

Artículo segundo.—*Objeto.* El Banco de España tendrá a su cargo la emisión de billetes de curso legal y su régimen y administración; realizará el servicio de Tesorería del Estado y el financiero de la Deuda del Estado y del Tesoro, así como, mediante los oportunos conciertos, los de-

más servicios permanentes u ocasionales que el Tesoro precise; desempeñará todas las funciones propias de su carácter de Banco de Bancos; efectuará las operaciones comerciales propias de los Bancos de esta clase, con entidades o empresas particulares, en los casos excepcionales a que se refiere el artículo veintisiete del presente Decreto-ley; informará y asesorará al Gobierno en las materias de moneda y crédito, y ejercerá las funciones relativas a la disciplina e inspección de la Banca privada y las demás que le encomienden las Leyes.

Siempre que en este texto se mencione a la Banca privada y a los efectos del mismo, se entiende comprendido en este término al Banco Exterior de España.

El movimiento de los pagos exteriores y la centralización de las reservas metálicas y de divisas deberán tras pasarse al Banco de España; no obstante, las funciones que la legislación vigente atribuye al Instituto Español de Moneda Extranjera continuarán siendo desempeñadas en su actual adscripción ministerial, quedando a determinación del Gobierno el momento en que deba efectuarse aquel tras-paso de funciones y el de cualquier otro de carácter operativo que el Gobierno acuerde una vez desaparecidas, totalmente, las presentes circunstancias del comercio exterior.

Artículo tercero.—*Régimen.* El Banco de España tendrá, en el orden técnico, una organización autónoma. Se regirá en su organización y funcionamiento, por este texto, por su Reglamento y disposiciones especiales, y en sus operaciones, en primer término por dichas normas, y como supletorias por las de derecho privado aplicables al caso.

El Banco de España se considera incluído en el artículo quinto de la Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho de Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas. (1.) (Pág. 50.)

El Banco de España estará exento de toda clase de contribuciones, impuestos y demás gravámenes del Estado, provincia o municipio, siempre que aquél sea el sujeto directo de la imposición.

Artículo cuarto. — *El Gobernador.* El Gobernador del Banco de España ostentará el carácter de jefe supremo de la administración del Banco, y será el representante legal del mismo.

Presidirá el Consejo general y el Consejo ejecutivo del Banco. Podrá delegar en los Subgobernadores las funciones que estime convenientes.

Será nombrado y separado libremente por el Consejo de Ministros.

Artículo quinto. — *Los Subgobernadores.* Podrá haber más de dos Subgobernadores, con la denominación de primero, segundo y, en su caso, tercero. Los Subgobernadores tendrán carácter técnico y no podrán ser removidos, a no ser por razones disciplinarias, durante un período de tres años. Pueden ser reelegidos. Serán nombrados por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda. Asumirán el grupo de funciones directivas que el Gobernador les asigne.

En caso de vacante o ausencia del Gobernador le sustituirán por su orden los Subgobernadores.

Artículo sexto. — *Directores generales.* Los Directores generales en el número que se prevenga en el Reglamento serán nombrados por Orden ministerial, a propuesta del Consejo ejecutivo; desempeñarán a las órdenes inmediatas de los Subgobernadores, las funciones de gestión, administración y ejecución que éstos les encomienden, debiendo cumplir y hacer cumplir al personal del establecimiento las disposiciones legales y reglamentarias, así como las emanadas del Gobernador, de los Subgobernadores y del Consejo ejecutivo. Podrá ser requerida su asistencia sin voto y como informadores a las reuniones del Consejo ejecutivo. Sólo podrán ser separados en su caso con arreglo a lo prevenido en el Reglamento.

Artículo séptimo. — *El Consejo ejecutivo.* El Consejo ejecutivo del Banco de España se compondrá del Gobernador, los Subgobernadores y tres miembros del Consejo gene-

ral del Banco de los comprendidos en el apartado c) del artículo octavo, designados por el Ministro de Hacienda. Los Consejeros se elegirán por un plazo de dos años y podrán ser separados en todo momento por acuerdo del Ministro de Hacienda.

El Consejo ejecutivo estará presidido por el Gobernador.

Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos. En caso de empate decidirá el voto el Presidente.

El Consejo ejecutivo tendrá como Secretario, sin voz ni voto, al que desempeña tal función en el Banco de España.

Artículo octavo.—*El Consejo general.* El Consejo general se constituirá en la forma siguiente:

- a) El Gobernador como Presidente.
- b) Los Subgobernadores.
- c) Cinco Vocales designados libremente por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda, representantes de los intereses generales de la economía nacional.
- d) Dos representantes por la Banca privada, a propuesta del Consejo Superior Bancario.
- e) Un representante por el Instituto de Crédito a medio y largo plazo.
- f) Un representante por el Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro.
- g) Cuatro representantes por la Organización Sindical.
- h) Un representante de los empleados del Banco de España, con veinte años de servicio, por lo menos, propuesto por el propio personal del Banco.

El nombramiento de los representantes a que se refieren los incisos d), e), f) y h) del párrafo anterior se hará por el Ministro de Hacienda, previa autorización del Consejo de Ministros, a propuesta de los Organismos o entidades cuya representación hayan de ostentar. Podrán ser removidos en cualquier momento por orden expedida por el Ministro de Hacienda.

El Consejo general será convocado y presidido por el

Gobernador. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos, siendo decisivo, en caso de empate, el voto del Presidente.

FACULTADES DEL GOBIERNO

Artículo noveno.—La autoridad en materia monetaria y de crédito corresponde al Gobierno, el cual señalará al Banco de España y a los diferentes organismos de crédito, a través del Ministro de Hacienda, las directrices que hayan de seguirse en cada etapa, orientando, en definitiva, la política monetaria y de crédito en la forma que más convenga a los intereses del país.

FACULTADES DEL MINISTRO DE HACIENDA

Artículo décimo.—*Facultades del Ministro de Hacienda en orden al Banco de España.* Corresponde al Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros, sin perjuicio de las facultades que este texto y demás disposiciones legales le atribuyen:

a) Dictar las normas generales sobre la actuación del Banco como ejecutor en la esfera de su competencia de la política monetaria y crediticia del Gobierno.

b) Dictar las normas a que ha de ajustarse el Banco en el ejercicio de sus funciones respecto de la disciplina e inspección de la Banca privada.

c) Fijar los tipos de interés aplicables en las operaciones del Banco.

d) Acordar la actuación del Banco en orden a la adquisición y enajenación, por su cuenta, de valores y efectos en mercado abierto.

e) Aprobar el balance y cuentas del ejercicio del Banco de España, a los que acompañará un informe emitido por una Comisión del Consejo general a la que se encargará

de la censura de cuentas de dicha Institución, Comisión cuyo nombramiento se hará anualmente por el Gobierno a propuesta del Ministro de Hacienda.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DEL BANCO DE ESPAÑA

Artículo decimoprimer. — *Atribuciones del Gobernador.* El Gobernador será el Jefe supremo de la administración del Banco, representante legal del mismo y su órgano de relación con el Gobierno, a través del Ministro de Hacienda.

Representará al Banco de España en los Institutos de Crédito a medio y largo plazo y de Crédito de las Cajas de Ahorro.

Decidirá en todas aquellas cuestiones no reservadas al Consejo ejecutivo y cuidará de la ejecución de los acuerdos del mismo. Podrá delegar las funciones que crea convenientes en los Subgobernadores.

Artículo decimosegundo. — *Funciones del Consejo ejecutivo.* Corresponde al Consejo ejecutivo:

a) Decidir acerca de las medidas que deba adoptar el Banco, ateniéndose a las instrucciones recibidas del Ministerio de Hacienda en el ejercicio de sus funciones de Banco de Bancos y de disciplina e inspección de la Banca privada.

b) Acordar las medidas previas para ofrecer el concurso posible del Banco dentro de su órbita de acción y compatible con la seguridad de sus operaciones, cuando así lo aconseje el interés general, a las Instituciones de crédito que, habiendo acomodado su actuación a las buenas prácticas bancarias se encuentren, en caso de crisis general o por otras circunstancias, con dificultades de tesorería.

c) Acordar las operaciones de crédito con el Tesoro y demás organismos del sector público, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 21 de este Decreto-ley.

d) Informar en aquellas materias que atribuyan las Leyes al Banco de España.

e) Decidir acerca de las demás operaciones que realice el Banco en los casos a que se refiere el artículo 28.

f) Emitir los informes que competan al Banco respecto de la fijación de líneas especiales de redescuento a los Bancos privados en los casos en que proceda con arreglo a las leyes y disposiciones sobre la materia.

g) Dirigir la administración del Banco y nombrar el personal con arreglo a lo establecido en su Reglamento y fijar sus emolumentos.

Artículo decimotercero.—*Funciones del Consejo general.*
El Consejo general del Banco tendrá las siguientes funciones:

a) Ser informado de la marcha del Banco y sus operaciones.

b) Deliberar y formular las conclusiones que estime procedentes acerca del balance anual y cuentas del ejercicio del Banco, que se elevará juntamente con las mismas al Ministro de Hacienda.

c) Asesorar al Gobierno respecto de aquellas cuestiones monetarias y crediticias en que aquél lo solicite.

d) Actuar como órgano consultivo del Gobernador y del Consejo ejecutivo en aquellas cuestiones que éstos le sometan.

También podrá elevar al Gobierno, a través del Ministro de Hacienda, informes y dictámenes sobre la situación general de la política monetaria y de crédito, estudiando en ellos las soluciones que técnicamente puedan adoptarse.

Los acuerdos del Consejo general se tomarán por mayoría de votos.

El Consejo general se reunirá a convocatoria del Gobernador por lo menos una vez al mes.

FUNCIONES DEL BANCO DE ESPAÑA COMO ASESOR Y EJECUTOR DE LA POLITICA MO- NETARIA Y DE CREDITO

Artículo decimocuarto.—*Asesor del Gobierno.* El Banco de España será órgano asesor del Gobierno en materia monetaria y crediticia e informará al mismo, a través del Ministro de Hacienda, tanto en las cuestiones en que su dictamen sea preceptivo como en aquellas otras en que, de una manera especial, se solicite su informe. Podrá también, por iniciativa propia, hacer llegar al Gobierno su opinión en aquellas cuestiones que, dentro del ámbito de sus funciones asesoras, considere oportunas.

Artículo decimoquinto. — *Estadística e información.* A efectos estadísticos, todos los Bancos privados deberán remitir al de España un balance mensual dentro de los primeros quince días del mes siguiente al que se refiera. Podrá también solicitar el Banco de dichas entidades, con carácter reservado, datos concretos sobre el balance y la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

El Instituto de Crédito a medio y largo plazo y el Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro facilitarán al Banco de España respecto de las entidades oficiales de crédito y Cajas de Ahorro, respectivamente, el balance mensual de sus operaciones.

Asimismo podrá dirigirse el Banco de España a otras entidades e Instituciones solicitando los datos e informes necesarios para dichos estudios estadísticos.

Artículo decimosexto.—*Central de Información de Riesgos.* El Banco de España establecerá un Servicio Central de Información de Riesgos en relación con las operaciones de crédito de la Banca, Cajas de Ahorro y demás entidades de crédito.

Todos los Bancos privados y las entidades de crédito, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, remitirán periódicamente al Banco de España todos los datos sobre la concesión de créditos que reglamentariamente se determine

y en los formularios que se establezcan. Las entidades oficiales de crédito y las Cajas de Ahorro remitirán a la Central de Riesgos dichos datos por conducto del Instituto de Crédito a medio y largo plazo y del Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro, respectivamente.

Los datos que habrán de ser remitidos dentro de los primeros quince días de cada mes natural, con referencia a las operaciones del mes anterior, contendrán no solamente las circunstancias excepcionales que puedan darse en los créditos, tales como insolvencia, moratoria u otras análogas, sino también señalarán aquellos créditos que, por su importancia, puedan significar concentración de riesgo, a cuyo efecto en las normas reglamentarias que se dicten se señalarán las cuentas de crédito que determinan la obligación de esta comunicación en función no solamente del capital y reservas patrimoniales de la entidad de crédito, sino de la solvencia patrimonial del usuario del crédito mismo.

Los datos que en cumplimiento de lo que en este artículo se establece remitan los Bancos, Cajas de Ahorro y entidades de crédito estarán además clasificados en función de las actividades económicas o profesionales del acreditado, así como por zonas geográficas y plazos.

La Central de Riesgos del Banco de España elaborará, a base de los datos recibidos, la estadística general del desarrollo del crédito en España, y dentro del sector bancario notificará a la Banca privada aquellos casos en que reunidos los antecedentes de diversas entidades de crédito puedan representar un riesgo excepcional o exceder de los límites prudenciales de la política de crédito.

Con independencia de esta notificación de los casos excepcionales del crédito, los Bancos podrán solicitar de la Central de Riesgos los antecedentes e informes que consideren necesarios para su normal desarrollo, quedando obligados al mantenimiento del secreto bancario, cuya infracción será corregida disciplinariamente.

En las notificaciones que el Banco de España curse en virtud de lo que anteriormente se dispone, se omitirá la de-

signación de las otras entidades de crédito en que la persona física o jurídica resultare endeudada.

El desarrollo del servicio de la Central de Riesgos será regulado en el Reglamento que al efecto se dicte por el Ministro de Hacienda a propuesta del Banco de España.

Artículo decimoséptimo.—*Inspección.* Corresponderá al Banco de España como órgano de inspección de la Banca privada y atendiendo a las normas que dicte el Ministro de Hacienda:

a) Disponer inspecciones periódicas de la Banca privada a fin de comprobar el cumplimiento de las normas vigentes en relación a sus balances, estructura de sus cuentas, intereses y comisiones que aplique en sus operaciones, y en lo referente al cumplimiento de las normas generales sobre política de crédito.

b) Llamar la atención de los Consejos de Administración y Directores de las Sociedades bancarias cuando estime que la política de dividendos que practique, sin incumplir las normas obligatorias sobre la materia, no se acomodan a los resultados efectivos de la explotación y a la situación y perspectiva de sus negocios. Si la entidad interesada desoyera la advertencia, el Ministro de Hacienda, a propuesta del Banco de España, podrá disponer que la aludida indicación sea inserta en la Memoria que se presente a la aprobación de la primera Junta general de socios que se celebre.

c) Disponer inspecciones extraordinarias a un Banco privado sobre cualquier aspecto de sus actividades, cuando así lo juzgue conveniente.

d) Formular indicaciones a un Banco sobre la política de crédito que practique.

e) Proponer al Ministro de Hacienda las sanciones a que hubiera lugar, con arreglo a las normas legales que se dicten sobre la materia.

El ejercicio de la función señalada en los apartados b), c) y d) corresponderá al Gobernador del Banco y figurará entre las facultades no delegables.

OPERACIONES DEL BANCO DE ESPAÑA

Artículo decimoctavo.—*Emisión.* Corresponderá al Banco de España la facultad exclusiva de emitir billetes de curso legal al portador.

La determinación del límite superior de la circulación fiduciaria será hecha por acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda. El Banco de España cuidará de elevar al Ministro de Hacienda en tiempo oportuno la correspondiente propuesta acompañada de una Memoria en la que se expongan los motivos de aquélla.

Artículo decimonoveno.—*Canje.* El Banco de España podrá acordar la retirada de la circulación y el canje de los billetes de determinada serie o clase, previo anuncio en el "Boletín Oficial del Estado" y señalamiento del plazo correspondiente.

Los billetes que no se presenten al canje dentro de un plazo de siete años, contados desde el día siguiente al en que termine el plazo establecido, se considerarán caducados.

El importe de dichos billetes dejará de figurar en el pasivo del Banco y será destinado a la amortización de la Deuda especial a que se refiere el artículo veintitrés.

Artículo vigésimo.—*Operaciones con el Tesoro.* El Banco realizará gratuitamente el servicio de Tesorería del Estado y el servicio financiero de la Deuda del Estado y del Tesoro.

El servicio de mediación en las operaciones estatales de crédito, así como los demás servicios permanentes u ocasionales que preste el Banco de España al Estado se regulará por convenios especiales.

Los anticipos del Banco al Tesoro no podrán exceder del doce por ciento del total de los gastos anuales autorizados para la Administración Central y Organismos autónomos, y no devengarán intereses.

Artículo vigésimo primero.—*Crédito al sector público.* Aparte de lo dispuesto en el artículo anterior, el Estado sólo

podrá utilizar los recursos del Banco para las necesidades públicas por medio de una Ley.

Por Decreto, previo informe del Consejo de Economía Nacional, se fijará el límite máximo de los créditos que puedan autorizarse por el Banco de España a organismos públicos, empresas nacionales y nacionalizadas para operaciones de corto plazo o de campaña.

Se exceptúan los créditos al Tesoro para la financiación de las operaciones de las entidades oficiales de crédito, los cuales podrán ser autorizados por el Consejo de Ministros fijándose el plazo y condiciones de su cancelación. Estos créditos tendrán como límite máximo el correspondiente al incremento que en cada año se señale para las "Cédulas para Inversiones" en circulación, y devengarán el interés que se convenga, sin que pueda exceder del mayor señalado a dichas Cédulas.

Artículo vigésimo segundo.—*Cartera de renta.* El Banco de España sólo podrá aumentar, con autorización expresa del Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda, su actual cartera de renta.

Los títulos que figuren en ésta no podrán ser tampoco enajenados sin expresa aprobación del Ministro de Hacienda.

Artículo vigésimo tercero.—También mantendrá en su cartera, mientras no sea amortizado totalmente, el título nominativo sin interés de Deuda especial, que figura actualmente en su activo y a que se contraen las Leyes de trece de marzo de mil novecientos cuarenta y dos y treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis.

Se destinará a la amortización de dicha Deuda especial hasta la extinción total de la misma el importe de los beneficios liquidados del Banco. La amortización se llevará a efecto en la forma y condiciones que establece el artículo noveno de la Ley de trece de marzo de mil novecientos cuarenta y dos.

A medida que vaya amortizándose la Deuda especial a que se refiere el párrafo anterior, el Banco de España pro-

cederá a adquirir bienes o valores para contrapartida de los billetes en circulación, en la misma cuantía de las reducciones del valor de activo de dicha Deuda. La materialización a que se refiere el presente párrafo será potestativa del Ministro de Hacienda.

Artículo vigésimo cuarto.—Únicamente por Ley podrá acordarse la cesión, enajenación, gravamen o traslado al extranjero de las existencias en oro y plata del Banco de España.

Artículo vigésimo quinto.—*Cuenta Instituto Español de Moneda Extranjera.* El Banco de España mantendrá abierta a favor del Instituto Español de Moneda Extranjera una cuenta de crédito en pesetas, con el límite que el Gobierno a propuesta del Ministro de Hacienda, señale.

La cuenta de crédito devengará los intereses que fije el Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda, sobre el exceso que, en su caso, represente el saldo deudor de esta cuenta en relación con la contrapartida en pesetas del oro propiedad del Instituto Español de Moneda Extranjera.

El Banco y el Instituto podrán también convenir para rebajar la expresada cuenta, la cesión por el último al primero de oro.

Artículo vigésimo sexto.—*Operaciones del Banco de España con la Banca privada.* El Banco de España podrá realizar con la Banca privada todas las operaciones propias de su naturaleza de Banco de Bancos, ateniéndose a las normas de carácter general que dicte el Ministro de Hacienda.

Artículo vigésimo séptimo.—*Operaciones con el sector privado.* Se abstendrá de realizar operaciones directamente con entidades, empresas o personas particulares, salvo que por razón de interés público sea autorizado previamente, y para cada caso concreto, por el Consejo de Ministros.

Las operaciones de crédito a favor de personas o empresas privadas vigentes en la actualidad serán totalmente liquidadas en el plazo de cinco años.

Artículo vigésimo octavo.—*Mercado abierto.* Con independencia de la cartera de renta que posea el Banco, éste podrá adquirir, poseer y enajenar, por cuenta propia, valores y efectos y operar con dicha cartera a efectos de regulación del mercado de dinero.

Podrá también recibir títulos de la Deuda del Estado y del Tesoro para su ulterior negociación.

BALANCE Y BENEFICIOS

Artículo vigésimo noveno.—*Balance.* El modelo de balance del Banco de España y las cuentas que deben figurar en el mismo será aprobado por el Ministro de Hacienda.

El Banco dará a conocer su balance de situación por lo menos mensualmente. El correspondiente al final del ejercicio se publicará en el "Boletín Oficial del Estado".

Artículo trigésimo.—*Beneficios.* Al final de cada ejercicio anual, que se cerrará en treinta y uno de diciembre, el Banco establecerá la cuenta de beneficios cuya aplicación será el aumento del patrimonio, teniendo como contrapartida activa aquel tipo de inversiones que en beneficio de la economía nacional y de su expansión determine el Ministro de Hacienda para cada período económico.

En tanto no haya sido totalmente amortizada la Deuda especial de las Leyes de mil novecientos cuarenta y dos y mil novecientos cuarenta y seis, los beneficios líquidos del Banco se destinarán íntegramente a la amortización de aquélla.

Artículo trigésimo primero.—*Continuidad.* La aplicación al Banco de España de lo dispuesto en este Decreto-ley y en el Reglamento que sea aprobado por el Gobierno no entrañará solución de continuidad en su contabilidad, ni sustitución de deudor o acreedor en sus débitos y créditos de cualquier clase, ni cambio o modificación de titularidad o dominio en sus bienes y derechos.

Artículo trigésimo segundo.—*Incompatibilidades.* El Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda, determinará las incompatibilidades con otros cargos públicos y privados que puedan afectar al Gobernador, Subgobernadores y miembros del Consejo ejecutivo del Banco.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. El Gobernador, con el Consejo ejecutivo, redactará y elevará al Ministro de Hacienda el Reglamento por que haya de regirse el Banco de España. Su aprobación definitiva se hará por Decreto aprobado en Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda.

Segunda. Mientras no sea aprobado el nuevo Reglamento general, regirán los actuales Estatutos y Reglamento en cuanto no se halle modificado por el presente texto.

Tercera. Se autoriza al Ministro de Hacienda para dictar las disposiciones necesarias en orden a la organización y funcionamiento del Banco de España en su tránsito del régimen actual al establecido en el presente texto.

DISPOSICION ADICIONAL

Nacionalización. El Estado adquiere para su anulación la totalidad de las acciones representativas del capital del Banco de España, el cual queda nacionalizado.

El justo precio de dichas acciones será pagado por el Estado a los titulares de las mismas en la cuantía, forma y plazos señalados en la disposición final primera de la Ley dos/mil novecientos sesenta y dos, de catorce de abril sobre Bases de Ordenación del Crédito y de la Banca.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Por el Ministerio de Hacienda se habilitará el crédito necesario para la efectividad de los pagos que hayan de realizarse con arreglo a lo establecido en la disposición adicional de este Decreto-ley, en relación con la disposición final de la Ley dos/mil novecientos sesenta y dos, de catorce de abril, sobre Bases de Ordenación del Crédito y de la Banca.

Segunda. Este Decreto-ley, del que se dará cuenta inmediata a las Cortes, comenzará a regir el día de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", quedando derogados desde ese momento los artículos de la Ley de Ordenación Bancaria de treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis y demás disposiciones sobre la materia en cuanto se opongan al presente texto.

Así lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado en Madrid a siete de junio de mil novecientos sesenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

(1) La Ley de 26-XII-1958 sobre régimen jurídico de las entidades estatales autónomas dice en su artículo 5.º: «Las disposiciones de la presente Ley no son de aplicación:

A) A las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana y a las de Comercio, Industria y Navegación.

B) A las organizaciones de regantes reconocidas por la legislación de Aguas.

C) A las entidades oficiales de Seguros sociales obligatorios y complementarios de la previsión social, sin perjuicio de su obligación de dar a conocer al Ministerio de Hacienda, cuando éste lo considere oportuno, la cifra de sus ingresos, gastos e inversiones, y de rendir anualmente al Gobierno una Memoria de su actuación.

D) A las entidades oficiales de Seguros privados en cuanto a las operaciones técnicas que realicen derivadas de la recaudación de primas y del pago de indemnizaciones.

E) Al Instituto Nacional del Libro.

F) Al Instituto Español de Moneda Extranjera en cuanto a las operaciones técnicas que tengan a su cargo.

DECRETO-LEY 18/1962 DE 7 DE JUNIO DE 1962
Sobre creación del Instituto de Crédito
a Medio y Largo Plazo

Publicado en el "Boletín Oficial del Estado" de 13 de
junio de 1962.

**DECRETO-LEY SOBRE CREACION DEL INS-
TITUTO DE CREDITO A MEDIO Y LARGO
PLAZO**

El Estado y la Comunidad Autónoma de Madrid, de acuerdo
con el artículo 149.1.1.ª de la Constitución, en virtud de la
competencia que les corresponde en materia de crédito a
medio y largo plazo en sustitución del actual Consejo y
según las competencias y funciones de este órgano pre-
sionado por las disposiciones de esta ley.

La creación de este Instituto obedece a la necesidad de
desarrollar el nuevo sistema crediticio y financiero estatal
y regional en sustitución de la estructura existente en
los países que forman la zona de influencia del Consejo
estatal por la Ley de creación de la estructura de un
sistema financiero y crediticio y para la creación de un
sistema financiero que en el campo del crédito a medio
y largo plazo cubra y que se pueda ser utilizado
para el desarrollo de las actividades de inversión de los
sectores y más aún por falta de un órgano superior de crédito
estatal y regional que cubra en función de esta estructura
dependencia de las entidades superiores de crédito para la
gestión de los recursos crediticios de fondo regional y
estatal a la ordenación de la política del Gobierno, de acuerdo
con el artículo 149.1.1.ª de la Constitución.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Por el Ministerio de Hacienda se facilitará el crédito necesario para la ejecución de las obras que resulten de las disposiciones que se dicten en el sentido de la disposición adicional de esta Ley, en relación con la disposición final de la Ley de 1907, en materia de crédito y de los recursos de este, entre otros, de la Ley de 1907 y de la Ley de 1908.

Segunda. Esta Ley entrará en vigor el día de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", quedando derogada la Ley de 1907 en lo que se refiere a la ejecución de las obras que resulten de las disposiciones que se dicten en el sentido de la Ley de 1907, en materia de crédito y de los recursos de este, entre otros, de la Ley de 1907 y de la Ley de 1908.

Tercera. Esta Ley entrará en vigor el día de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", quedando derogada la Ley de 1907 en lo que se refiere a la ejecución de las obras que resulten de las disposiciones que se dicten en el sentido de la Ley de 1907, en materia de crédito y de los recursos de este, entre otros, de la Ley de 1907 y de la Ley de 1908.

FRANCISCO FRANCO

Por el Ministerio de Hacienda se facilitará el crédito necesario para la ejecución de las obras que resulten de las disposiciones que se dicten en el sentido de la Ley de 1907, en materia de crédito y de los recursos de este, entre otros, de la Ley de 1907 y de la Ley de 1908.

Al A. la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana y a la de Comercio, Industria y Agricultura.

Al A. la Corporación de Aguas y Saneamiento por la legislación de Aguas.

Al A. la Corporación de Aguas y Saneamiento por la legislación de Aguas y Saneamiento, en lo que se refiere a la ejecución de las obras que resulten de las disposiciones que se dicten en el sentido de la Ley de 1907, en materia de crédito y de los recursos de este, entre otros, de la Ley de 1907 y de la Ley de 1908.

Al A. la Corporación de Aguas y Saneamiento por la legislación de Aguas y Saneamiento, en lo que se refiere a la ejecución de las obras que resulten de las disposiciones que se dicten en el sentido de la Ley de 1907, en materia de crédito y de los recursos de este, entre otros, de la Ley de 1907 y de la Ley de 1908.

Al Ministerio Nacional de Obras.

Al Ministerio Nacional de Obras y Transportes, en lo que se refiere a la ejecución de las obras que resulten de las disposiciones que se dicten en el sentido de la Ley de 1907, en materia de crédito y de los recursos de este, entre otros, de la Ley de 1907 y de la Ley de 1908.

DECRETO-LEY 19/1962 DE 7 DE JUNIO DE 1962 SOBRE CREACION DEL INSTITUTO DE CRE- DITO A MEDIO Y LARGO PLAZO

(Publicado en el "Boletín Oficial del Estado" de 13 de junio de 1962.)

La base tercera de las contenidas en la Ley dos/mil novecientos sesenta y dos, de catorce de abril, sobre Ordenación del Crédito y la Banca, manda crear el Instituto de Crédito a medio y largo plazo en sustitución del actual Comité, y señala sus características y funciones dentro del ámbito normativo propio de las disposiciones de aquel carácter.

La creación de este Instituto como una de las piezas fundamentales del nuevo sistema crediticio y bancario ratifica y refuerza las consecuencias de la experiencia recogida en los últimos años mediante la eficaz actuación del Comité establecido por la Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho y viene a llenar plenamente el vacío institucional que en el campo del crédito oficial a medio y largo plazo existía, y que no pudo ser cubierto hasta ahora de modo satisfactorio por insuficiencia de sus medios y más aún por falta de un órgano superior de orientación y control que tuviera atribuidas la alta dirección e inspección de las entidades oficiales de crédito, para asegurar que todas ellas contribuirían en forma coordinada y armónica a la ejecución de la política del Gobierno, en orden a la equilibrada expansión de la economía nacional.

El problema de la ordenación del crédito a plazo medio y largo, de carácter fundamentalmente inversionista, se planteaba de modo más apremiante en estos momentos en que los esfuerzos del Gobierno se dirigen hacia la puesta en práctica de un trascendental programa de desarrollo económico, que exige una diligente y adecuada movilización de todos los recursos disponibles, con especial consideración de los sectores a cuya financiación se orientan las ayudas crediticias prestadas por los Bancos oficiales y las demás entidades de crédito a que se refieren los párrafos primero y cuarto de la base cuarta de la citada Ley de catorce de abril de mil novecientos sesenta y dos.

La dirección unificada de las entidades integrantes del sistema crediticio oficial implica asimismo en las fuentes de obtención de recursos una unidad que, aparte de las ventajas derivadas de una mayor claridad y simplificación en el aspecto financiero, permitirá más fácilmente acomodar en cada momento las condiciones de las operaciones que realicen las entidades oficiales de crédito a las cambiantes necesidades de la economía.

Por ser el Instituto el organismo que dentro del nuevo sistema está más vinculado a la política del Gobierno, son más numerosas las representaciones ministeriales y sindicales que en el Banco de España e Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro.

Sin perjuicio de que se lleve a efecto seguidamente la nacionalización de los Bancos y la reorganización de las entidades antes mencionadas, es patente la conveniencia de que el Instituto de Crédito a medio y largo plazo intervenga inmediatamente en el ejercicio de las atribuciones que le son concedidas por dicha Ley y que por su naturaleza merecen urgente atención.

Las tareas encomendadas al Instituto exigen unos procedimientos ágiles. Por ello, en su organización interna, además del Consejo General, ampliamente representativo, existirá otro de composición más reducida y un Director gene-

ral, que llevarán a cabo, con la asidua dedicación requerida, las funciones ejecutivas; en el aspecto externo, la alta dirección de las Entidades Oficiales de Crédito se realizará principalmente mediante las instrucciones que el Instituto les transmita, con la frecuencia e intensidad que las circunstancias aconsejen, y la suspensión de los acuerdos adoptados por tales Entidades, cuando proceda, con una fórmula de decisión definitiva, rápida y flexible.

Las mismas razones de urgencia antes expuestas respecto de la creación del Instituto de Crédito a medio y largo plazo obligan a dotarle desde el primer momento de los recursos que le permitan enlazar su actuación, sin solución de continuidad, con la del Comité al que sustituye.

En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en su reunión del día once de mayo de mil novecientos sesenta y dos, y en uso de la autorización que me confiere el artículo trece de la Ley de Cortes,

DISPONGO :

Artículo primero.—La autoridad en materia de crédito corresponde al Gobierno, el cual señalará, a través del Ministro de Hacienda, las directrices que hayan de seguirse en cada etapa, orientando en definitiva la política de crédito oficial en la forma que más convenga a los intereses del país.

Artículo segundo.—En cumplimiento de lo dispuesto en la base tercera de la Ley dos/mil novecientos sesenta y dos, de Bases de Ordenación del Crédito y de la Banca, de catorce de abril, se crea el Instituto de Crédito a medio y largo plazo como Entidad de Derecho público, que será el órgano permanente de relación entre el Gobierno y las Entidades Oficiales de Crédito.

Dependerá del Ministerio de Hacienda y tendrá personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, sin que le sean de aplicación las disposiciones de la

Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho sobre régimen jurídico de las Entidades Estatales Autónomas, en cuyo artículo quinto se entenderá incluido. (Ver nota pág. 50.)

Artículo tercero.—Ejercerá la alta dirección e inspección de las Entidades Oficiales de Crédito, a las que proveerá en forma coordinada de los recursos suficientes para que puedan actuar eficazmente en la política de desarrollo económico; les transmitirá las instrucciones de carácter general a que han de acomodar sus operaciones, y velará por el cumplimiento de aquéllos.

Artículo cuarto.—El Instituto dispondrá de los medios financieros que el Ministerio de Hacienda le proporcione procedentes de:

a) Emisión de las "Cédulas para Inversiones", creadas por la Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho.

b) Anticipos del Tesoro.

c) Préstamos de Gobiernos extranjeros y otros fondos que puedan obtenerse a través de operaciones de crédito con instituciones internacionales y, en general, con el exterior.

d) Préstamos concertados con el Banco de España, previa autorización del Consejo de Ministros.

Con independencia de dichos medios, el Instituto de Crédito a medio y largo plazo será dotado con un patrimonio inicial de cien millones de pesetas, que podrán estar invertidos en bienes muebles o inmuebles de cualquier clase.

Artículo quinto.—En casos extraordinarios, y con autorización del Ministro de Hacienda, podrá el Instituto obtener fondos mediante operaciones de tesorería, por plazo no superior a seis meses, con los Bancos y Cajas de Ahorro, o por anticipos del Banco de España.

Artículo sexto.—El Instituto de Crédito a medio y largo plazo estará exento de toda clase de contribuciones, impues-

tos y demás gravámenes del Estado, Provincia y Municipio, siempre que aquél sea el sujeto directo de la imposición.

Artículo séptimo.—El Ministro de Hacienda, a tenor de lo dispuesto en el artículo primero, comunicará al Instituto de Crédito a medio y largo plazo las directrices que hayan de seguirse en cada período y el Instituto ajustará a ellas las instrucciones que ha de cursar a las Entidades Oficiales de Crédito.

Artículo octavo.—La cifra global de los recursos que asigne anualmente el Instituto a las Entidades Oficiales de Crédito y las normas generales sobre su distribución por sectores y aplicación en operaciones de crédito se fijarán por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Hacienda, previo informe del Consejo de Economía Nacional respecto de la mencionada cifra global.

Artículo noveno.—Para mejor cumplimiento de las funciones de alta dirección que corresponden al Instituto respecto de las Entidades Oficiales de Crédito, podrá asistir el Director general de aquél a las reuniones de los Consejos y órganos de administración de dichas Entidades, sin tomar parte en sus deliberaciones, salvo para hacer observaciones respecto del cumplimiento de las leyes, de las normas dictadas por el Gobierno o el Ministerio de Hacienda o de las instrucciones de carácter general cursadas por el Instituto, para lo cual será convocado siempre con remisión del orden del día y nota de los asuntos incluidos en éste.

Igualmente se remitirá por las Entidades Oficiales de Crédito al Instituto de Crédito a medio y largo plazo copias de los acuerdos adoptados y cuantos informes, balances y datos estadísticos le sean pedidos por el Instituto.

Cuando el Director general del Instituto, si se hallara en la reunión, o el Presidente o cualquiera de los miembros del Consejo u órgano de Administración de las Entidades Oficiales de Crédito, considere que alguno de los acuerdos adoptados no se ajusta a las Leyes, normas e instrucciones

a que se refiere el párrafo primero de este artículo, quedará en suspenso, a petición suya, la efectividad del acuerdo y se elevará inmediatamente al Instituto de Crédito a medio y largo plazo consulta razonada, a la que se unirá el voto particular que pueda presentar el solicitante de la suspensión, y el Instituto confirmará o revocará el acuerdo en término de quince días, transcurridos los cuales sin que recaiga decisión se entenderá tácitamente revocado el acuerdo si la suspensión se debiera a iniciativa del Presidente o del Director general del Instituto, y confirmado en los demás casos.

Artículo décimo.—Corresponderá al Instituto, como órgano de inspección de las Entidades Oficiales de Crédito:

a) Disponer inspecciones periódicas de tales entidades, a fin de comprobar el cumplimiento de las instrucciones que les curse y de las normas de todas clases a que ha de ajustarse en su actuación.

b) Efectuar inspecciones extraordinarias a una Entidad Oficial de Crédito sobre cualquier aspecto de sus actividades.

c) Aprobar provisionalmente los presupuestos y cuentas de gastos de las Entidades Oficiales de Crédito, que serán sometidos por el Presidente del Instituto a la aprobación definitiva del Ministro de Hacienda.

d) Emitir informe sobre balances y cuentas anuales de las Entidades Oficiales de Crédito, que anualmente han de remitir al Instituto para su elevación al Ministro de Hacienda.

Artículo undécimo.—Corresponderá también al Instituto de Crédito a medio y largo plazo:

A) La concesión de créditos especiales con destino específico a inversiones productivas que se estimen convenientes, en armonía con los planes o programas de desarrollo económico de la nación, aprobados por el Gobierno, y la propuesta al Ministro de Hacienda de operaciones excep-

cionales de crédito a empresas, cuando así convenga por graves motivos de orden económico o social.

Una vez acordada la concesión de dichos créditos podrá encargarse de su tramitación a la Entidad o Entidades de Crédito que juzgue más adecuadas, proveyéndolas de los fondos necesarios.

Los créditos mencionados en el párrafo primero de este apartado sólo se concederán previa apreciación de su necesidad y de las dificultades con que se encuentre la empresa peticionaria para obtener fondos por las vías ordinarias de financiación, y en cada caso se establecerán las condiciones convenientes para que tales créditos especiales sean cancelados tan pronto como dicha imposibilidad o dificultad desaparezca.

B) Autorizar la emisión o puesta en circulación de obligaciones y demás títulos de renta fija, conforme al Decreto de seis de septiembre de mil novecientos sesenta y uno.

C) Autorizar a los Bancos privados y al Exterior de España para conceder créditos por plazo superior a dieciocho meses o para hacer uso de líneas especiales de redescuento en el Banco de España, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto-ley de dos de agosto de mil novecientos sesenta y disposiciones complementarias.

D) La tramitación, estudio y propuesta de resolución de las peticiones que se formulen para obtener las reducciones fiscales a que se refiere el Decreto-ley de diecinueve de octubre de mil novecientos sesenta y uno, en la forma establecida en las normas dictadas para su desarrollo.

E) Adquirir con carácter circunstancial valores mobiliarios y enajenarlos.

F) Las demás funciones que le sean atribuidas por disposición legal o que le puedan ser delegadas por el Ministro de Hacienda.

Artículo duodécimo.—La jefatura suprema del Instituto de Crédito a medio y largo plazo corresponderá a su Presi-

dente, que lo será del Consejo General y del Consejo Ejecutivo del Instituto.

La Administración del Instituto será realizada por un Director general, de carácter técnico y categoría similar a la de los Subgobernadores del Banco de España, que será nombrado y separado libremente por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda.

Artículo décimotercero.—El Consejo General del Instituto de Crédito a medio y largo plazo se constituirá de la siguiente forma:

Presidente: El Gobernador del Banco de España.

Vicepresidente: El Subsecretario del Tesoro y Gastos Públicos.

Vocales:

- a) El Director general de este Instituto.
- b) Uno de los Subgobernadores del Banco de España.
- c) El Comisario del Plan de Desarrollo y un representante de cada uno de los Ministerios de Hacienda, Agricultura, Industria, Comercio, Trabajo, Información y Turismo, Gobernación y Vivienda.
- d) Cuatro representantes de la Organización Sindical.
- e) Un representante de la Banca privada, a propuesta del Consejo Superior Bancario.
- f) Un representante por el Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro.

El nombramiento de los representantes a que se refieren los apartados d) y siguientes del párrafo anterior se hará por el Ministro de Hacienda a propuesta de los organismos o entidades cuya representación hayan de ostentar. Podrán ser removidos en cualquier momento por Orden expedida por el Ministro de Hacienda.

Secretario: El del Consejo Ejecutivo, sin voz ni voto.

Artículo décimocuarto.—El Consejo Ejecutivo del Instituto de Crédito a medio y largo plazo estará compuesto por los siguientes miembros del Consejo General:

Presidente: El Gobernador del Banco de España.

Vicepresidente: El Subsecretario del Tesoro y Gastos Públicos.

Vocales: El Director general del Instituto, el Subgobernador del Banco de España y otros tres miembros del Consejo General designados por el Ministro de Hacienda.

El Consejo Ejecutivo designará un Secretario, sin voz ni voto, entre el personal del Instituto.

A las reuniones del Consejo Ejecutivo podrán ser convocados también otros miembros del Consejo General cuando haya de tratarse en aquél cuestiones generales que afecten de modo fundamental a los Ministerios o intereses que representen.

Artículo décimoquinto.—Los acuerdos, tanto del Consejo General como del Ejecutivo, se tomarán por mayoría de votos de los asistentes a la reunión, decidiendo en caso de empate el voto del Presidente.

A petición expresa de uno de los miembros de cualquiera de los Consejos, quedará en suspenso el acuerdo a que aquélla se refiera, pasando el asunto debatido a resolución del Ministro de Hacienda.

Artículo decimosexto.—El Consejo General y el Consejo Ejecutivo serán convocados y presididos por el Gobernador del Banco de España; en su defecto, por el Vicepresidente, y a falta de éste, por el Vocal de más edad.

Artículo decimoséptimo.—El Presidente del Instituto de Crédito a medio y largo plazo es el Jefe supremo de la administración del mismo y su órgano de relación con el Gobierno a través del Ministro de Hacienda. Asimismo le representará en sus relaciones con el Banco de España y el Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro.

Podrá delegar las funciones que crea convenientes en el Director general.

Artículo decimooctavo.—Corresponderá al Consejo General:

a) Efectuar la distribución anual entre las Entidades Oficiales de Crédito del volumen de recursos que se determine por el Gobierno, dentro de las normas fijadas por el Ministro de Hacienda, a tenor de lo dispuesto en el artículo octavo de este Decreto-ley.

b) Ser informado mensualmente de la marcha del crédito oficial en general.

c) Deliberar y formular las conclusiones que estime procedentes acerca de la Memoria anual sobre el desenvolvimiento del sector crediticio oficial y sobre los balances y cuentas de las Entidades Oficiales de Crédito antes de su elevación al Ministerio de Hacienda.

d) Asesorar al Gobierno respecto de las cuestiones que en relación con el crédito oficial le solicite aquél.

e) Actuar como órgano consultivo del Consejo Ejecutivo en las materias que éste le someta.

Artículo decimonoveno.—El Consejo Ejecutivo desempeñará todas las funciones que por este Decreto-ley se encomiendan al Instituto de Crédito a medio y largo plazo y que no estén atribuidas expresamente al Consejo General o al Presidente.

Artículo vigésimo.—Incumbe al Director general del Instituto:

a) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo General y del Consejo Ejecutivo.

b) Dirigir la administración del Instituto; desempeñar la Jefatura de todo el personal de éste; proponer al Consejo Ejecutivo el nombramiento, retribución y separación de aquél, y organizar el trabajo en las oficinas.

c) Preparar los expedientes que han de ser sometidos al Consejo General y al Consejo Ejecutivo, recabar la realización de los estudios y la emisión de los informes que hayan de figurar en cada expediente y formular propuesta de resolución.

d) Redactar los presupuestos y cuentas anuales de gas-

tos de administración del Instituto, que ha de someter al Consejo Ejecutivo.

c) Firmar todos los escritos y comunicaciones que haya de expedir el Instituto, salvo los que se dirijan a los Ministros o aquellos cuya firma se reserve al Presidente.

f) Redactar la Memoria anual a que se refiere el apartado c) del artículo decimoctavo de este Decreto-ley.

g) Proponer al Presidente las medidas especiales que crea procedente sean adoptadas y la adquisición con carácter circunstancial de valores mobiliarios o su enajenación.

Artículo vigésimo primero.—Se concede un crédito extraordinario de cien millones de pesetas, aplicado al presupuesto en vigor de la sección vigésimo sexta, Ministerio de Hacienda, capítulo seiscientos diez, servicio quinientos treinta y uno, Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales, concepto quinientos treinta y un mil seiscientos once, "Para constituir el patrimonio inicial del Instituto de Crédito a medio y largo plazo", a que se refiere el artículo cuarto del presente Decreto-ley.

El importe del mencionado crédito se cubrirá en la forma establecida en el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Contabilidad.

Para atender los gastos ordinarios que ocasione el funcionamiento del Instituto detraerá éste el porcentaje que el Ministerio de Hacienda señale de los intereses que devenguen los fondos que reciba para su distribución a las Entidades Oficiales de Crédito.

Artículo vigésimo segundo.—El Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda, determinará las incompatibilidades con otros cargos públicos o privados que puedan afectar al Presidente, al Director general y a los demás miembros del Consejo Ejecutivo del Instituto.

Artículo vigésimo tercero.—Los funcionarios pertenecientes a cualquiera de los Cuerpos del Ministerio de Hacienda que sean designados para prestar sus servicios en el Insti-

tuto de Crédito a medio y largo plazo, a propuesta de éste y por orden del Ministro, Jefe del Departamento, se considerarán a todos los efectos en situación de servicio activo.

Artículo vigésimo cuarto.—Se autoriza al Ministro de Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para desarrollar los preceptos de este Decreto-ley, del que se dará cuenta inmediata a las Cortes.

Artículo vigésimo quinto.—Quedan derogados o modificados en cuanto se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto-ley los artículos primero al cuarto y sexto al décimo de la Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, sobre Entidades Oficiales de Crédito a medio y largo plazo.

Artículo vigésimo sexto.—El presente Decreto-ley entrará en vigor en la fecha de su promulgación.

DISPOSICION ADICIONAL

Queda suprimida la Comisaría de la Banca Oficial.

DISPOSICION TRANSITORIA

Mientras no se efectúe la nacionalización de los Bancos oficiales y la reorganización de las demás Entidades Oficiales de Crédito a que se refieren los párrafos primero y cuarto de la base cuarta de la Ley dos/mil novecientos sesenta y dos, de catorce de abril, de Bases de Ordenación del Crédito y la Banca continuarán siendo regidos por sus actuales órganos de gobierno y administración.

Así lo dispongo por el presente Decreto-ley dado en Madrid a siete de junio de mil novecientos sesenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO-LEY 26.1962 DE 7 DE JUNIO DE 1962
SOBRE REORGANIZACION Y FUNCIONES DEL
INSTITUTO DE CREDITO DE LAS CAJAS DE
AHORRO

**DECRETO-LEY SOBRE REORGANIZACION Y
FUNCIONES DEL INSTITUTO DE CREDITO
DE LAS CAJAS DE AHORRO**

DECRETO-LEY 20/1962 DE 7 DE JUNIO DE 1962 SOBRE REORGANIZACION Y FUNCIONES DEL INSTITUTO DE CREDITO DE LAS CAJAS DE AHORRO

(Publicado en el "Boletín Oficial del Estado" de 13 de junio de 1962.)

La Ley de Bases de Ordenación del Crédito y la Banca pretende que el conjunto de instituciones que integran la Organización crediticia puedan financiar armónica y coordinadamente, sin fallos, interferencias ni vacíos, el Plan general de desarrollo de la economía española que ha de ponerse en práctica en un futuro próximo.

En esta coordinación de actividades se encomienda a las Cajas, dadas sus altruistas finalidades, su extensa red de sucursales y sus cuantiosos recursos, la concesión de créditos con finalidad social encaminados a fomentar las inversiones de carácter agrícola, la ayuda al artesano, a los pequeños negocios comerciales o industriales, a los modestos aspirantes a la propiedad mobiliaria y, en general, a las entidades económicas de más interés desde el punto de vista social.

Estas funciones asignadas a las Cajas exigen reestructurar el superior órgano de control de las mismas encomendando al Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro las funciones de alta dirección, coordinación e inspección de aquéllas y utilizándole de cauce de relación de las Cajas

con el Banco de España y el Instituto de Crédito a Medio y Largo plazo.

Sin perjuicio del posterior desarrollo de lo dispuesto en la base quinta de la Ley es evidente la necesidad de que el Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro ejerza inmediatamente las atribuciones que le son concedidas, dotándole de una agilidad que le permita actuar eficazmente impulsando la labor crediticia de las Cajas en materia social supliéndolas en casos excepcionales y coordinándolas de tal forma que en todo momento se cumplan los designios del Gobierno de facilitar créditos a las clases modestas españolas, permitiéndolas el acceso a la propiedad de los instrumentos de trabajo, de las tierras que cultivan, de las casas que habitan o de las acciones de las Empresas donde prestan sus servicios.

Para ello se estructura el Instituto de modo que en su organización interna, además del Consejo General ampliamente representativo, existirá otro de composición más reducida y un Director general, que llevarán a cabo con la asidua dedicación requerida las funciones ejecutivas. En el aspecto externo, la alta dirección de las Cajas de Ahorro se realizará principalmente mediante las instrucciones que el Instituto les transmita con la frecuencia e intensidad que las circunstancias aconsejen y mediante la exigencia y vigilancia del cumplimiento de las órdenes emanadas del Gobierno a través del Ministro de Hacienda.

En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en su reunión del día once de mayo de mil novecientos sesenta y dos, en uso de la autorización que me concede el artículo trece de la Ley de Cortes y oída la Comisión a que se refiere el artículo diez de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

DISPONGO:

Artículo primero.—La autoridad en materia monetaria y de crédito corresponde al Gobierno, el cual señalará al Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro a través del Ministro de Hacienda las directrices que hayan de seguirse en cada etapa, orientando, en definitiva, la política de crédito en la forma que más convenga a los intereses del país.

Artículo segundo.—El Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro es una entidad oficial con personalidad jurídica y plena capacidad. Dependerá del Gobierno a través del Ministro de Hacienda.

Artículo tercero.—El Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro tendrá en el orden técnico una organización autónoma. Se regirá en su organización y funcionamiento por este texto, por el Reglamento y disposiciones especiales que se dicten y en sus operaciones en primer término, por las dichas normas, y como supletorias, por las normas de derecho privado aplicables al caso.

El Instituto de Crédito estará exento de toda clase de contribuciones, impuestos y demás gravámenes del Estado, Provincia y Municipio que puedan afectar a los actos, contratos y documentos en que intervenga, a los inmuebles de su pertenencia, a las operaciones que realice dentro de sus fines o concierte con terceros o a los resultados que arrojen sus balances anuales.

El Instituto se considera incluido en el artículo quinto de la Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho de régimen jurídico de las Entidades Estatales Autónomas. (Ver nota pág. 50.)

Artículo cuarto.—El Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro desempeñará las funciones de alta dirección, coordinación e inspección de las Cajas de Ahorro; será elemento de relación de las mismas con el Banco de España y el Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo.

Como establecimiento de crédito podrá realizar las acti-

vidades y operaciones precisas para el cumplimiento de sus propios fines.

Artículo quinto.—El Ministro de Hacienda comunicará al Instituto las directrices que hayan de seguirse en cada periodo, y el Instituto ajustará a ellas las instrucciones que ha de cursar a las Cajas de Ahorros.

Igualmente comunicará el Ministro de Hacienda al Instituto los porcentajes que de sus recursos ajenos hayan de invertir las Cajas en cada clase de valores públicos, los de inversión obligatoria en las distintas modalidades de préstamos y créditos y la relación de títulos de renta fija o variable y máximos porcentajes de los recursos no afectos a inversiones obligatorias que puedan invertir en cada clase de valores.

El Instituto podrá elevar al Ministro de Hacienda propuestas relacionadas con las materias indicadas en el párrafo anterior.

Artículo sexto.—Corresponde al Instituto:

A. En su función de alta dirección de las Cajas de Ahorro:

a) Exigir y vigilar el cumplimiento de las Ordenes emanadas del Ministerio de Hacienda en materia de inversión de fondos de ahorro, de beneficios, de rendición de balances y cuentas de resultados, constitución y materialización de reservas, apertura de oficinas y cualquiera otra disposición o acuerdo del Departamento referente al funcionamiento de estas entidades.

b) Informar los expedientes sobre creación, fusión o liquidación de Cajas de Ahorro y apertura de oficinas.

c) Desempeñar las funciones que le sean atribuidas por disposición legal o que le puedan ser delegadas por el Ministro de Hacienda.

B. En su función coordinadora:

a) El Instituto podrá conceder préstamos de cualquier clase a las Cajas de Ahorro empleando los recursos que éstas tengan voluntariamente depositados en él o prestados con el mismo carácter.

b) Cuando alguna Caja no pudiese realizar sus inversiones obligatorias entregará al Instituto para su utilización en los mismos fines las cantidades correspondientes al porcentaje no empleado en las condiciones que se señalen por el Gobierno. Tales inversiones se efectuarán por medio de otras Cajas o directamente por el Instituto cuando así lo ordene el Ministro de Hacienda.

c) El Instituto, en casos excepcionales, cuando así lo autorice el Ministro de Hacienda, previo acuerdo del Consejo de Ministros, podrá conceder créditos a particulares que suplan la labor de las Cajas en materia social, con cargo a sus disponibilidades. En los mismos casos podrá el Ministro de Hacienda ordenar al Instituto la realización de operaciones concretas de aquella clase por cuenta del Tesoro.

C. Como funciones de inspección:

a) Disponer inspecciones periódicas a las Cajas para comprobar el cumplimiento de las normas vigentes en relación con los balances, estructura de cuentas, intereses que se apliquen y en lo referente al cumplimiento de las normas generales que regulen su funcionamiento y operaciones.

b) Disponer inspecciones extraordinarias sobre cualquier aspecto de las actividades de una Caja.

c) Formular indicaciones sobre su actuación.

d) Proponer al Ministro de Hacienda la imposición de sanciones a que hubiere lugar con arreglo a las normas que se dicten sobre la materia.

e) Recabar de las entidades de él dependientes cuantos datos y documentos estime oportunos para el conocimiento de su situación.

D. Para completar la labor de las Cajas:

a) Prestará su apoyo a las mismas para solventar cualquier dificultad económica de carácter transitorio cuando así lo aconseje el interés general.

b) Favorecerá el concurso de las Cajas a la obra social del Gobierno.

c) Facilitará por cuenta de las Cajas la adquisición y negociación de valores e inversión de fondos cuando aquéllas se lo encomienden.

d) Facilitará el giro y transferencia de fondos y libretas entre las Cajas.

e) Oficiará como agencia de ellas en las imposiciones y reintegros que su clientela efectúe por conducto del Instituto.

Artículo séptimo.—Fondo patrimonial y suscripción de cuotas:

El fondo patrimonial del Instituto queda fijado en cien millones de pesetas y podrá aumentarse o disminuirse por acuerdo del Consejo General, previa autorización del Ministro de Hacienda.

Estará representado por cuotas nominativas de cinco mil pesetas, que únicamente podrán suscribir las Cajas de Ahorro.

Las cuotas sólo podrán transmitirse entre las propias Cajas, debiendo solicitarse previamente de la Dirección del Instituto la correspondiente autorización para efectuar la transmisión.

Excepcionalmente en el caso de que alguna Caja deseara enajenar sus cuotas y ninguna otra estuviere dispuesta a adquirirlas, podrán ser cedidas al Tesoro, quien las adquirirá previo pago de su valor.

ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION

Artículo octavo.—La Jefatura suprema del Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro corresponderá a su Pre-

sidente, que lo será del Consejo General y del Consejo Ejecutivo.

La administración del Instituto será realizada por un Director general de carácter técnico y categoría similar a la de los Subgobernadores del Banco de España, que será nombrado y separado libremente por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda.

Artículo noveno.—El Consejo General del Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro se constituirá en la siguiente forma:

a) Presidente, el Gobernador del Banco de España.

b) En representación del interés nacional:

Uno. El Subsecretario del Tesoro y Gastos Públicos, que será Vicepresidente primero.

Dos. El Director general del Instituto.

Tres. Un Subgobernador del Banco de España.

Cuatro. Un representante del Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo.

Cinco. Un representante del Ministerio de Trabajo.

Seis. Tres Vocales más nombrados por el Gobierno a propuesta del Ministro de Hacienda.

c) En representación de las Cajas de Ahorro: Once Vocales, uno de los cuales pertenecerá a la Caja Postal.

d) En representación de la Economía: Tres Vocales propuestos por la Organización Sindical.

Los nombramientos de representantes del Ministerio de Trabajo, Cajas de Ahorro, Organización Sindical e Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo se harán por el Ministro de Hacienda a propuesta del Ministro de Trabajo, de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, Caja Postal, Organización Sindical e Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo, respectivamente.

Los Consejeros representantes de los Organismos enumerados en el párrafo anterior podrán ser removidos en cualquier momento por orden del Ministro de Hacienda.

De entre los Vocales representantes de las Cajas, el Ministro de Hacienda designará el que con carácter de Vice-

presidente segundo haya de presidir las reuniones del Consejo en ausencia del Presidente y del Vicepresidente primero.

Actuará de Secretario, sin voz ni voto, un funcionario del Instituto designado por el Consejo.

Artículo décimo.—El Consejo Ejecutivo estará compuesto por los siguientes miembros del Consejo General:

Presidente: El del Instituto.

Vicepresidente: El Subsecretario del Tesoro y Gastos Públicos.

Vocales:

- a) El Director general del Instituto.
- b) El Subgobernador del Banco de España.
- c) El representante de la Caja Postal, dos de los representantes de las Cajas de Ahorro y dos representantes del interés nacional de los comprendidos en el apartado b), número seis, del artículo noveno, designados todos ellos por el Ministro de Hacienda.

Actuará de Secretario, sin voto, quien lo sea del Consejo General.

Artículo undécimo.—Los acuerdos tanto del Consejo General como del Consejo Ejecutivo se tomarán por mayoría de votos de los asistentes a la reunión, decidiendo en caso de empate el voto del Presidente.

A petición expresa de cualquiera de sus miembros quedará en suspenso el acuerdo a que se refiere aquélla pasando el asunto debatido a resolución del Ministro de Hacienda.

Artículo duodécimo.—Atribuciones del Presidente del Instituto:

El Presidente es el Jefe supremo de la administración del mismo y su órgano de relación con el Gobierno, a través del Ministro de Hacienda.

Asimismo le representará en sus relaciones con el Banco de España y el Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo. Podrá delegar las atribuciones que crea convenientes en el Director general.

Artículo decimotercero.—Corresponderá al Consejo General:

a) La aprobación de la Memoria, balance y cuentas del Instituto, sin perjuicio de la definitiva aprobación del Ministro de Hacienda.

b) Acordar el aumento o disminución del fondo patrimonial, conforme a lo dispuesto en el artículo séptimo.

c) Asesorar al Gobierno respecto de las cuestiones que en relación con las Cajas de Ahorro le solicite el Ministro de Hacienda.

d) Actuar como órgano consultivo del Consejo Ejecutivo en las materias que éste le someta.

También podrá formular al Ministro de Hacienda, por iniciativa propia, mociones sobre las cuestiones relacionadas con las Cajas de Ahorro.

Artículo decimocuarto.—Funciones del Consejo Ejecutivo:

Incumbe al Consejo Ejecutivo el desempeño de todas las funciones que en este Decreto-ley se encomiendan al Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro y que no estén atribuidas expresamente al Consejo General o al Presidente.

Artículo décimoquinto.—Funciones del Director general: Incumbe al Director General del Instituto:

a) Velar por el cumplimiento de las órdenes del Consejo General y del Consejo Ejecutivo.

b) Dirigir la administración del Instituto, desempeñar la jefatura del personal, proponiendo al Consejo Ejecutivo el nombramiento, retribución y separación del mismo, y organizar el trabajo en las oficinas.

c) Preparar los expedientes que han de ser sometidos al Consejo General y Consejo Ejecutivo, recabando los estudios e informes que hayan de figurar en cada expediente, y formular propuesta de resolución.

d) Redactar los presupuestos y cuentas anuales de gastos de administración del Instituto.

e) Proponer al Presidente las medidas especiales que crea procedente sean adoptadas.

f) Firmar todos los escritos y comunicaciones que haya de expedir el Instituto, salvo las que se dirijan a los Ministros y aquellos cuya firma se reserve el Presidente.

Artículo decimosexto.—Incompatibilidades:

El Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda, determinará las incompatibilidades con otros cargos públicos o privados que puedan afectar al Presidente, al Director general y a los demás miembros del Consejo Ejecutivo del Instituto.

Artículo decimoséptimo.—Ejercicio económico y balance:

Los ejercicios económicos se cerrarán el treinta y uno de diciembre de cada año y dentro de los seis meses siguientes deberá ser sometido el oportuno balance y la cuenta de resultados al Consejo General quien una vez aprobados lo elevará al Ministro de Hacienda para su aprobación definitiva.

Artículo decimoctavo.—Aplicación de beneficios:

De los beneficios anuales se destinará hasta un seis por ciento, como máximo, del fondo patrimonial para su distribución entre las cuotas participantes.

El remanente, si lo hubiere, se aplicará a incrementar el fondo patrimonial.

DISPOSICION TRANSITORIA

La aplicación del presente Decreto-ley al Instituto de Crédito no entrañará solución de continuidad en su contabilidad ni sustitución de deudor o acreedor en sus débitos o créditos de cualquier clase, ni cambio ni modificación de titularidad o dominio en sus bienes o derechos.

DISPOSICIONES FINALES

Queda derogado el artículo decimocuarto de la Ley de siete de julio de mil novecientos treinta y cuatro y el Decreto de catorce de marzo de mil novecientos treinta y tres, por el que se aprobaron los Estatutos del Instituto de Crédito de las Cajas Generales de Ahorro y demás disposiciones en lo que se opongan al presente Decreto-ley.

Queda suprimida la tasa del cero coma diez por mil que la Dirección General de Banca, Bolsa e Inversiones venía percibiendo de las Cajas Generales de Ahorro y en consecuencia quedan derogados los Decretos de veinticuatro de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve en la parte que a dicha tasa afecta y en su totalidad el Decreto de treinta y uno de marzo de mil novecientos sesenta.

Se autoriza al Ministro de Hacienda para dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo de este Decreto-ley, del que se dará cuenta inmediata a las Cortes.

Este Decreto-ley entrará en vigor el día de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

Así lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado en Madrid a siete de junio de mil novecientos sesenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El presente documento es una copia de un original que se encuentra en el archivo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. El original es un manuscrito de la época de la Ilustración, escrito en español. El texto trata sobre la historia de la ciudad de Sevilla, mencionando su fundación y su desarrollo a lo largo de los siglos. El manuscrito está escrito en una caligrafía clara y legible, y contiene varias ilustraciones que representan escenas de la vida cotidiana en Sevilla. El documento es de gran valor histórico y cultural, y es una importante fuente de información sobre la historia de la ciudad de Sevilla.

El presente documento es una copia de un original que se encuentra en el archivo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. El original es un manuscrito de la época de la Ilustración, escrito en español. El texto trata sobre la historia de la ciudad de Sevilla, mencionando su fundación y su desarrollo a lo largo de los siglos. El manuscrito está escrito en una caligrafía clara y legible, y contiene varias ilustraciones que representan escenas de la vida cotidiana en Sevilla. El documento es de gran valor histórico y cultural, y es una importante fuente de información sobre la historia de la ciudad de Sevilla.

El presente documento es una copia de un original que se encuentra en el archivo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. El original es un manuscrito de la época de la Ilustración, escrito en español. El texto trata sobre la historia de la ciudad de Sevilla, mencionando su fundación y su desarrollo a lo largo de los siglos. El manuscrito está escrito en una caligrafía clara y legible, y contiene varias ilustraciones que representan escenas de la vida cotidiana en Sevilla. El documento es de gran valor histórico y cultural, y es una importante fuente de información sobre la historia de la ciudad de Sevilla.



25

ORDENACION DEL CREDITO Y DE LA BANCA